

PRIMER JUZGADO DE LETRAS

IQUIQUE

Iquique, quince de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece don **CLAUDIO ROBERTO VERDUGO MUÑOZ**, mecánico Diesel, en representación de su cónyuge doña **NANCY GABRIELA ZAMORA CAYO**, labores de hogar, quien ratifica lo obrado a folio 3 de marras, ambos domiciliados para estos efectos en Pasaje Villa Hermosa N° 2155, Iquique, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra de **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, representada indistintamente por don Christian Sayel, ignora profesión, y/o por don Nivaldo Guillermo Gatica Fuentes ambos con domicilio en Esmeralda N° 340, Primer Piso, Edificio Esmeralda, Iquique, quien expone:

Que contrajeron matrimonio el 13 de febrero de 1987, bajo régimen de sociedad conyugal, el cual se mantienen hasta el día de hoy, por lo que comparece en calidad de representante legal de dicha sociedad, actuar que ratifica doña Nancy a folio 3.

Relata que bajo este régimen matrimonial, el año 2011, su cónyuge adquirió la vivienda que les sirve hasta el día de hoy de casa-habitación, ubicada en Pasaje Uno N° 4350, perteneciente al Lote 1 del Conjunto Habitacional “Villa Hermosa”, de la Comuna de Alto Hospicio, la que se encuentra inscrita a Fojas 1035 vuelta, Número 1738, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, del año 2011, haciendo presente que al día de hoy el Pasaje Uno ha pasado a denominarse Pasaje Villa Hermosa, y que cuenta con el perfil de calle Santa Rosa de Huara.



Agrega que dicho inmueble no había presentado problema alguno en su estructura, instalaciones ni equipamiento, sin embargo, producto de fallas en la red pública de agua potable en el arranque y extensión de matriz que pasa por calle Santa Rosa de Huara, se generaron inundaciones en su terreno desde el año 2016 en adelante, al punto que en el año 2020, llegó a deteriorar y socavar el suelo, lo que trajo como consecuencia que se decretara la demolición del muro perimetral poniente del patio de dicho inmueble por parte de la Municipalidad de Alto Hospicio el 21 de septiembre de 2020, por considerarse un peligro.

Explica que, a partir del año 2016 (si es que no antes), comienzan a suceder una serie de situaciones anómalas provenientes de reiterados episodios de roturas de matriz y fallas del sistema sanitario a un costado de su propiedad (por calle Santa Rosa de Huara), cuyas aguas llegan a dar al patio de la casa (y luego se extienden al resto de la vivienda), haciendo que el suelo se socave y se genere el hundimiento del cierre perimetral y portón, y el socavamiento del radier.

Producto de lo anterior, hoy además de los daños irreparables al muro perimetral, tienen dos dormitorios que se están hundiendo y las paredes del baño abiertas.

Hace presente que, ante las inundaciones, se han presentado reclamos y la respuesta de Aguas del Altiplano (demandada de autos) es siempre la misma, en formato carta tipo, donde sólo cambia el nombre del usuario y que suele indicar que el colapso de los inmuebles se debe a la circunstancia de haberse edificado en suelo salino, pretendiendo con ello la demandada escapar a sus responsabilidades, -ello según la percepción de la actora-. A su entender, esta explicación no resiste mayor análisis, pues todas las viviendas de Alto Hospicio están edificadas en el mismo suelo y, evidentemente, no todas están colapsadas.

Sustenta su análisis que por el contrario, el daño producido a su vivienda sólo puede explicarse debido a las reiteradas roturas de matriz, esto es, debido al agua que proviene de las fallas de la red pública de agua potable, tal como refiere en lo precedente, provocan que el agua escurra de forma permanente, colapsando



en forma silenciosa y de manera uniforme la estructura de su terreno, y que provienen de la fatiga de material de las mismas, ocasionando grietas y socavones.

Menciona que el suelo en la comuna de Alto Hospicio, es sumamente duro, lo cual se puede verificar ejerciendo presión picando con herramientas caseras, en algo más de 15 centímetros debajo del suelo, encontrándose una enorme resistencia. Pero si se deja escurrir agua se apreciará que se ablanda el terreno como sucede en la mayoría de los suelos, sean salinos o no. En definitiva, las roturas de matriz y el consecuente escurrir de las aguas, son las causas que provocan el colapso estructural de las viviendas.

Indica que en razón de lo anterior, con fecha 22 de octubre de 2020, presentó una última denuncia a la demandada, con copia a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y atendido que la referida fue dirigida con copia al ente fiscalizador, la demandada esta vez cambió su respuesta y con fecha 16 de noviembre de 2020, mediante carta CAC/IQQ N° 85, en la que manifiesta que lamentan el hecho, pero que su ocurrencia obedece a hechos totalmente ajenos a su voluntad, y que, por tanto, no pueden asumir reparación alguna.

Afirma que la Superintendencia de Servicios Sanitarios respondió con fecha 24 de noviembre de 2020, mediante ORD. REGIONAL N° 4669/2020, indica carecer de facultades legales para hacerse parte de contiendas por daños a la propiedad y bienes e indemnizaciones, que deben ser resueltas por las partes ante tribunales competentes. Sin embargo, el ordinario agrega que el daño se habría generado producto de “arranques ilegales –robo de agua potable–” que Aguas del Altiplano habría cortado en reiteradas ocasiones, lo que cita de manera textual.

Fundamenta su acción en lo dispuesto en el artículo 1437 del Código Civil, en lo relativo a la fuente de las obligaciones, a su vez, hace referencia al artículo 2284 del mismo cuerpo legal, que define al cuasidelito.



Alude como norma fundante al artículo 2314, el que relaciona con el artículo 2329 ambos del Código Civil.

Arguye que en el caso de marras se está frente a la responsabilidad de la demandada derivada de su negligencia en el cuidado y mantención de la red pública de agua potable, que ha traído aparejados los daños a su propiedad que más adelante detallara, y que son consecuencia exclusiva de ésta, por no haber realizado las mantenciones y reparaciones de la matriz con carácter preventivo, a fin de evitar su colapso y las reiteradas inundaciones generadas.

De la Culpa Sanitaria.

Alega que todas las empresas sanitarias prestan un servicio de elevada relevancia en el ámbito nacional y los usuarios pagan por el mismo una tarifa mensual. Este servicio conlleva algo más que la venta y distribución de agua potable, incluyendo la mantención de las redes. Por otro lado, dichos servicios son considerados esenciales que ha de prestarse de manera segura, con regularidad y sin causar daños a la comunidad.

Afirma que la única eximente de responsabilidad de la demandada, sería estar en presencia de una fuerza mayor irresistible en los términos del Artículo 45 del Código Civil y, evidentemente, la ausencia de mantención y reparación preventiva de la red y la calidad del suelo de Alto Hospicio, no califican dentro de la figura indicada, pues se trata de un deber de prevención el primero, y de un estado inmutable y permanente el segundo, que no pueden en caso alguno devenir en fuerza mayor.

Precisa, que es de exclusiva responsabilidad de Aguas del Altiplano, el velar por la mantención permanente, preventiva, operativa, adecuada y oportuna de la red pública de distribución y recolección de aguas, con el objeto de evitar un perjuicio para la comunidad a la cual van dirigidas sus prestaciones. Para tales efectos cita el artículo 34 de la Ley de Servicios Sanitarios.

Por su parte, esgrime que el aludido Reglamento de Instalaciones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, se encarga de definir lo que se



entiende por redes públicas de distribución de agua potable en su artículo 9 el que cita y transcribe al efecto y agrega lo dispuesto en el artículo 9.1 del mismo reglamento.

Razona que de las normas reseñadas, resulta concluyente que la demandada al ser la empresa concesionaria, tiene el deber de controlar permanentemente y a su costa, la calidad del servicio que suministra, siendo de su responsabilidad contemplar en el diseño de la red de distribución de agua, la topografía del lugar donde se instalará la misma, y que abarca el arranque de agua potable, y el mantenimiento de éste, velando por su integridad a través de un programa de mantención preventiva, con el fin de evitar escurrimientos de agua. Por tanto es responsable por la mantención preventiva de las matrices de agua potable, y que cualquier colapso y rotura que se produzca por fatiga de material de éstas, que genere daño a los residentes del lugar, ha de ser indemnizado a éstos.

Alega la que responsabilidad de la demandada antes y después de las filtraciones, dice relación con el hecho de que el buen funcionamiento de las matrices de agua potable, así como los colectores de aguas servidas y todas las tuberías del sistema sanitario es reglamentariamente de responsabilidad de la demandada. Por ende, al producirse una filtración, rotura o colapso de estos componentes de la red de agua, que ocasione daños a los residentes del lugar, ello debe ser reparado por la empresa sanitaria.

Continúa alegando que la imputación de responsabilidad la funda en la falta de mantención por parte de la empresa sanitaria, en los términos ya descritos y que ocasionaron no una, sino que una serie innumerable de filtraciones de agua desde el año 2016 a la fecha, los que son imputables a la culpa infraccional de la demandada.

Indica que, las normas especiales que rigen el servicio sanitario y trascritas en el acápite anterior, son cristalinas en cuanto a la obligación de mantención y prevención por parte de la concesionaria de agua potable, no admitiendo interpretaciones diversas. Las matrices de agua potable, deben siempre estar al



cuidado de la sanitaria. Entonces, al ser de cargo de la demandada la mantención de aquellas, claramente debe ésta responder de todo perjuicio, que su omisión haya ocasionado a los usuarios que mes a mes pagan una tarifa de mantención por un servicio que en los hechos no se presta.

Previene que tras su última denuncia efectuada el 22 de octubre de 2020, la demandada asumió la postura en la que pretende desligarse de su responsabilidad, culpando a la calidad del suelo por los daños y no a su falta de mantención preventiva de la red, es decir, la demandada tomó cabal conocimiento de los daños y no accionó ningún operativo tendiente a reparar con prontitud dichos daños (infringiendo así el Art. 122 del Reglamento, ya citado), a pesar de lo grave y riesgoso que resultó para su familia el socavamiento, al punto que debieron recurrir a la Dirección de Obras Municipales de Alto Hospicio para que procediera a la demolición del cierre perimetral por el riesgo que ello implicaba para la integridad física, tanto de ellos como de sus vecinos y transeúntes del lugar.

Deduce que de esta manera, la demandada incurrió en lo que en Derecho de Daños se conoce como culpa contra legalidad y que consiste en la responsabilidad que nace ante una infracción normativa de la cual se siguen perjuicios. Se ha sostenido que, probada la infracción de norma, la obligación de reparar nace necesariamente si de esta desobediencia se ocasionan perjuicios. En la especie, se cumple la hipótesis descrita puesto que la demandada debía contar con un procedimiento preestablecido para evitar que los daños siguieran aumentando, como ha ocurrido en este caso.

Apunta que considerando la magnitud de los daños causados y los bienes jurídicos afectados, debió la demandada disponer que su familia se trasladara desde la vivienda afectada a otras dependencias donde pudieran pernoctar en forma segura y cómoda, mientras se reparase el inmueble, lo que no ocurrió, constituyendo una omisión culposa, fuente de responsabilidad civil como se demostrará.



En lo que respecta a la relación de causalidad, entre los hechos y el daño a la propiedad, tal y como indica la Dirección de Obras Municipales de Alto Hospicio, en su Certificado de Daños N° 094/2020 de 18 de agosto de 2020, se produjeron a consecuencia del “*asentamiento diferencial, originado por socavamiento del terreno*”, reiterando la actora las razones por las que se produjo el socavamiento, siendo fuente directa de los perjuicios que se demandan.

Reitera lo relativo al hecho de que de haber realizado las mantenciones la demandada, no hubiesen tenido lugar los daños y refiere además que a mayor abundamiento, así también lo concluye la Superintendencia de Servicios Sanitarios en la respuesta que nos entregó y que se acompaña.

A su turno, tal como alude previamente, los perjuicios sufridos derivan directa e inmediatamente del incumplimiento de la demandada en su obligación legal y reglamentaria de mantener la red de agua potable en óptimas condiciones de funcionamiento. En cuanto a la reparación que solicita, indica que la demandada debe responder por el daño patrimonial directo causado, además del daño moral ocasionado.

Sobre la indemnización de perjuicios por daños patrimoniales (daño directo o emergente), siguiendo a Díez-Picazo, señala que el ***damnum emergens*** comprende todas las pérdidas efectivamente sufridas y desembolsos realizados en atención al daño (DÍEZ-PICAZO, Luis: *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial*, t. V, Aranzadi, Navarra, 2011, pág. 344). Junto con ello señala que en nuestro ordenamiento esta reparación está contemplada en el Artículo 1556 del Código Civil y de esta manera este perjuicio comprende todo el coste que implica la reparación óptima de las secciones de la casa-habitación comprometidas con el socavamiento que generó un asentamiento diferencial que atentó contra la estructura y estabilidad del inmueble, agrietando los muros de habitaciones y hundiendo el baño de la vivienda, además de los evidentes daños en el cierre perimetral tantas veces mencionado. Todo ello implica realizar trabajos de demolición de muros y radier, realización de un refuerzo estructural, edificación de



nuevos muros y radier con malla acma, reparación de portón de acceso, y terminaciones, los que conforme presupuesto elaborado por CONSTRUCTORA IQUIQUE LTDA., de fecha 23 de octubre de 2020, la que ascienden a la suma de UF 359 a lo cual se deben sumar los trabajos de reparación de las habitaciones que a la fecha de este presupuesto no habían sido consideradas, pero que cuentan con certificación de daños por parte de la autoridad, por lo que avalúo ascendería a la suma de \$15.000.000.- (quince millones de pesos), la que ha de ser restituida debidamente reajustada conforme se indicó.

Describe que todos coinciden en que el daño moral es complicado de conceptualizar y de determinar, teniendo una amplia aceptación el hecho que en la responsabilidad civil se habla de daño moral en simple oposición al daño económico o patrimonial (BARROS BOURIE, Enrique: *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*, Editorial Jurídica, 2006, pág. 287).

Respecto de lo anterior, a diferencia de los daños patrimoniales, el daño moral no puede ser objeto de reparación, por lo que su finalidad es compensativa del mal causado, así, la víctima recibe una indemnización que no pretende restablecer el estado de las cosas anterior al daño, sino cumplir una función más modesta de permitir a la víctima ciertas ventajas que satisfagan su pretensión de justicia y la compensen por el mal recibido, por tanto, dicha compensación debe ser equitativa con el daño que se hubiere causado, esto es, que ha de existir alguna proporción entre la entidad del daño y la indemnización, tomando en consideración las peculiaridades del caso, en particular, la gravedad del ilícito (BARROS BOURIE, ob. cit., pp. 302, 311-313).

Solicita se tenga presente que han debido sufrir el deterioro de su hogar, ello sin poder trasladarse a otro lugar, aun cuando ha sido declarado riesgoso por la autoridad Municipal, lo que implica que han pasado juntos por angustias, miedo, frustración, estrés, y todo ello en el mismo lugar que día a día se tornaba más inseguro para vivir. Lo que se ve agravado por la indiferencia de la demandada y la impotencia de enfrentarnos a este gigante empresarial. En referencia al



quantum indemnizatorio para este daño moral, lo avalúan prudencialmente en la suma de \$10.000.000.- (diez millones de pesos) por cada uno de ellos, es decir, \$20.000.000.- (veinte millones de pesos) en total, sin perjuicio de la libertad que se entrega a S.S. para determinar o fijar una suma diversa en razón del mérito que arroje el proceso.

Por lo expuesto, solicitan tener por interpuesta demanda en juicio ordinario de menor cuantía de indemnización de perjuicios en contra del demandado ya individualizado acogerla a tramitación y, en definitiva, declarar que la demandada es responsable por los perjuicios ocasionados y, en consecuencia, la condene al pago de las sumas ya detalladas por concepto de daño patrimonial directo (\$15.000.000.-) y daño moral (\$20.000.000.-), por las razones indicadas, más intereses y reajustes, o al monto que S.S. estime procedente fijar para tales indemnizaciones conforme el mérito del proceso; y en todo caso, que se le condene al pago de las costas de la causa.

A folio 15, comparece don **CHRISTIAN BARRERA PERRET** y don **ROBERTO BAEZ CASTILLO**, abogados, en representación del demandado **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**, quien contesta la demanda de indemnización de perjuicios, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, señalando:

Que su representada, es actualmente la titular de los derechos de producción y distribución de agua potable, recolección y disposición de aguas servidas en la Primera y Décimo Quinta regiones, con más de 1.220.000 metros lineales de redes de agua potable y 1.000.000 de Alcantarillado. Derechos que fueron transferidos por medio de escritura pública otorgada con fecha 30 de agosto de 2004. Formalizándose con fecha 26 de octubre del mismo año, dicha transferencia del derecho de explotación de las concesiones de producción y distribución de agua potable, de recolección y disposición de aguas servidas entre las empresas ya señaladas, mediante Decreto Supremo N° 907/2004 del Ministerio de Obras Públicas, el cual se redujo a escritura pública el 4 de noviembre de 2004,



publicándose en el Diario Oficial el 01 de diciembre de 2004. Con fecha 15 diciembre del mismo año, dicho Decreto se inscribió en el Registro Público de Concesiones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Siendo hoy, Aguas del Altiplano quien explota los servicios sanitarios objeto de la concesión gozando de los mismos derechos y facultades que en su momento tenía el concesionario sanitario.

Solicita el rechazo total, absoluto y en todas sus partes de la demanda de autos, negando y controvirtiendo todas y cada una de las pretensiones y peticiones de la parte demandante, debido a que:

Primero y aún en el evento hipotético que la demanda no fuere controvertida por su parte, igualmente debiera ser rechazada, con expresa condena en costas, en consideración a la inexactitud de los hechos señalados, la falta de responsabilidad por parte de su representada y la evidente carencia de los elementos jurídicos mínimos para dar lugar a cualquier clase de responsabilidad lo que a su juicio, constituyen argumentos suficientes para el rechazo de las pretensiones de la actora.

Explica que de conformidad a las reglas legales, la carga de señalar los hechos que constituyen la responsabilidad extracontractual, corresponde a la parte demandante, lo cual, en el caso concreto no se cumplió, según se desprende de la simple lectura del libelo pretensor, en especial, no se señaló clara, ni precisamente cuales son los hechos culposos cometidos por la demandada, ni las fechas y circunstancias que se imputan, limitándose la demanda a señalar respecto de este punto, solo frases genéricas la que ejemplifica y cita, por lo que en ningún caso señala los hechos concretos, ni fechas, ni circunstancias en que se habrían producido las supuestas roturas, limitándose a realizar una narración de supuestos hechos sin que pueda establecer una relación de los mismos con una actuación u omisión de su representada.

Advierte que en efecto, la demanda de autos debe ser rechazada, con expresa condena en costas, debido a que no existen antecedentes que permitan



establecer culpa por parte de la demandada que amerite la supuesta provocación de un resultado nocivo respecto de la propiedad, como se expone en la demanda, a la inversa de lo que se ha señalado en ella, su parte ha cumplido, totalmente, con sus obligaciones como prestador del servicio sanitario, como se verá, está establecido en el Estatuto Tarifario y la Ley de Servicios Sanitarios, como así también la normativa sectorial que regula la prestación de servicios de su representada.

Añade que, no se aprecia la existencia de nexo causal entre el hecho generador del daño y el daño mismo alegado, de hecho, ni siquiera la contraria lo explicó, ni señaló en los hechos, ni como se produjeron, ni menos en qué fecha se habrían producido tales roturas, ya que tales circunstancias al alegarse la responsabilidad de orden extracontractual deben ser precisamente narrados con exactitud en la demanda, para que respecto de esos hechos precisos (hecho generador del daño) efectivamente hayan provocado ese daño, debiendo por tal sentido rechazarse la demanda.

Refiere que, aparece con absoluta claridad que la pretensión no podrá acogerse válidamente, por diversas cuestiones de la mayor relevancia jurídica de responsabilidad de la actora, relativas a la naturaleza misma de la acción que se ejerce, en efecto, conforme al número 4 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, la demanda debe necesariamente contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya y tal como se ha expuesto la demanda de autos no sólo carece de ello, sino además, incurre en una serie de contradicciones que la hacen ininteligible.

Reitera que de conformidad a las reglas legales, la carga de señalar los hechos que constituyen la responsabilidad extracontractual es del demandante, lo cual, en el caso concreto no se cumplió, según se desprende de la lectura de la demanda, en especial en cuanto la eventual culpa o negligencia, es decir, el elemento subjetivo de la responsabilidad extracontractual emanaría supuestamente de su representada.



A su turno alega como excepciones perentorias:

1.- Improcedencia del estatuto de responsabilidad extracontractual alegada por la contraria y excepción de falta de legitimación pasiva de su representada para ser demandada por los hechos del presente juicio:

Previo a exponer las razones de fondo por las cuales solicita el rechazo de la demanda de autos, hace presente, que la demandante, ha mencionado en su libelo que su acción se rige bajo el estatuto jurídico de la responsabilidad extracontractual. Sin embargo, como se dijo, Aguas del Altiplano, posee la explotación de los servicios sanitarios, otorgándole la calidad de "concesionario" del servicio de suministro de agua potable, respecto de los demandantes, quienes a su vez revisten la calidad de "usuarios" del servicio prestado, por lo que si exigen el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio, el estatuto jurídico aplicable, para perseguir una indemnización de perjuicios es, precisamente, el de la responsabilidad contractual, toda vez que existe claramente un vínculo jurídico previo entre las partes demandante y demandada. Por lo tanto, es fundamental y determinante, establecer previamente y con precisión cual es el estatuto jurídico aplicable entre las partes, ya que, dependiendo de éste, es que se pueden determinar los requisitos legales a aplicar, los que son diversos en sede contractual que en extracontractual. Estimando que en este caso concreto, no obstante que la demandante ha recurrido a normas de la responsabilidad extracontractual para fundamentar su acción, se está, clara y categóricamente, frente a una cuestión o materia de responsabilidad contractual, debido, no solamente al vínculo jurídico previo que liga a las partes de este proceso sino que, por la normativa legal aplicable y a la cual se refiere la propia demandante, por lo que lo anterior, debiera ser causa suficiente para rechazar la demanda.

Sobre lo alegado en lo precedente, hace alusión al artículo 92 del Decreto Supremo N° 1199/4 del Ministerio de Obras Públicas (Reglamento de Concesiones Sanitarias), el que transcribe en lo pertinente y del cual a su entender es claro del tenor del mismo, que se encuentran en sede contractual,



haciendo presente, además que, los hechos demandados nacen y devienen de la relación contractual entre las partes y no de un hecho ilícito, ni tampoco de un cuasidelito civil, ni menos de la ley, toda vez que si bien es cierto, toda obligación tiene su fundamento último en la ley, en esta materia rigen las normas contractuales que fijan las partes, siendo sólo reguladas por la superintendencia respectiva, pero sigue siendo materia privada y no una materia pública o perteneciente al derecho público como lo pretende hacer ver la parte demandante.

Agrega que en este sentido, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha señalado que existiendo relación contractual entre las partes y derivando los hechos demandados de una circunstancia accesoria a la misma, deben aplicarse las normas de la responsabilidad contractual por sobre las normas de la responsabilidad extracontractual. Tampoco podría el actor señalar que en este caso pudiere existir un concurso de responsabilidades y por ende la alternativa de elegir el régimen por el cual reclamar. Al respecto, hace referencia al profesor Enrique Barros Boure, en su obra Tratado de Responsabilidad Extracontractual, a propósito del concurso de Responsabilidades Contractual y Extracontractual, sobre la materia quien cita al efecto los siguientes fallos: “CS,18.4 1950 RDJ, t,xlvii,SEC 1º, 127; CS, 30.7.1991, t, LXXXVIII, sec 1º,40; Corte de Santiago, 8.9.1992,RDJ, t, LXXXIX, sec 2º,129, Corte de Santiago, 4.11.1999, RDJ, t, XCVI,sec 2º,100, Corte de Rancagua, 2.8.2004, rol N° 21.088 y Corte de Santiago, 22.7.2005,GJ301, 138.

Adiciona que es la misma demandante la que da a entender que los hechos alegados corresponden a una hipótesis de responsabilidad contractual, ya que en todo momento, desde que ocurren los supuestos hechos, acude a la demandada exigiendo el cumplimiento de obligaciones que sólo pueden ser exigible entre el prestador y sus usuarios. A contrario sensu, de no existir este vínculo contractual, no podrían ser exigibles las obligaciones contenidas en la demanda, que refieren a una serie de obligaciones propias y únicas del prestador de servicios, por lo cual entiende que la naturaleza de la responsabilidad es de orden contractual, y como



ella misma esgrime, a mayor abundamiento es la misma demandante en su calidad de cliente, remite una carta solicitando siempre el cumplimiento de obligaciones que solo derivarían de la relación entre proveedor del servicio y cliente del mismo. Sin embargo, en su libelo de demanda equivocadamente, decide interponer una demanda por responsabilidad extracontractual, en circunstancias sus propios actos y actuar precedente dan claramente cuenta de una responsabilidad de naturaleza contractual, pero jamás extracontractual.

Afirma que la calidad de clientes, queda establecida de conformidad al artículo 53 letra j) del D.F.L. 382 Ley General de Servicios Sanitarios y el artículo 2 del Decreto Supremo N° 50 de 2002, del Ministerio de Obras Públicas, el cual cita y transcribe en lo pertinente, lo que desde su perspectiva no hace más que corroborar que se está frente a una hipótesis de responsabilidad contractual.

A su turno se refiere a la jurisprudencia y la doctrina de los autores sobre esta materia. Así, la doctrina ha adherido a la opinión de Alessandri, cuya palabra ha sido considerada relevante en materia de responsabilidad, quien sostenía que la infracción de una obligación contractual, cuasicontractual o legal da origen a la responsabilidad contractual únicamente. A su parecer esta respuesta no ha variado en la comprensión mayoritaria de nuestra jurisprudencia, que hasta hoy sigue descartando la posibilidad de admitir la opción. Así se ha repetido en sentencias recientes, con una fidelidad absoluta al autor recién citado: *“Que en concepto de esta corte, el cúmulo de responsabilidades o, más propiamente, la opción de responsabilidades, no puede ser admitida. La infracción de una obligación contractual, cuasicontractual o legal da origen a la responsabilidad contractual únicamente: El acreedor cuyo deudor viola su obligación no podría demandarle perjuicios por esta violación con arreglo a los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. Admitir lo contrario importaría que el acreedor, al perseguir una indemnización alegando responsabilidad extracontractual en el incumplimiento de una obligación, destruya la fuerza obligatoria de la convención y se amparen un estatuto de responsabilidad distinto de aquél que las partes*



tuvieron en vista al momento de celebrar el respectivo contrato. Se vulneraría en tal caso, lo que dispone el artículo 1545 del Código Civil"; y agrega "...En estas circunstancias no puede fundarse una demanda de reparación de daños cuando éstos provienen de la responsabilidad que se imputa a los demandados al celebrar un determinado contrato: Dicha responsabilidad se regula por el estatuto contractual y no por el de los delitos y cuasidelitos civiles.

Explica que por lo razonado, no puede acogerse la demanda en aquella parte que se ha pretendido indemnización de perjuicios, ya que demanda en sede extracontractual. Lo anterior implica aceptar el llamado cúmulo (en realidad es una opción) de responsabilidades lo que, ya está dicho, no es procedente". Mismo criterio se ha seguido en sentencia en los autos caratulados "Heller con Aguas del Altiplano", Rol C-1112-2010, dictada con fecha 20 de diciembre del año 2011, y "Díaz con Aguas del Altiplano S.A." Rol C-3538-2010 dictada con fecha 12 de septiembre del año 2011 ambas del Segundo Juzgado de Letras de Iquique, las cuales se encuentran firmes y ejecutoriadas. Por los argumentos expuestos alega que su representada carece de legitimación pasiva para ser demandada por responsabilidad extracontractual, por lo que la demanda debe ser rechazada por ese solo hecho.

III.2.- Inexistencia de responsabilidad extracontractual: Esta parte ha actuado con la debida diligencia en la mantención de las redes de alcantarillado público, en especial de las matrices, arranques y tuberías adyacentes, según expone:

Niega y controvierte todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda, y que es carga del actor acreditar fehacientemente cada uno de ellos, y afirma que Aguas del Altiplano S.A., cumple de manera estricta con el mantenimiento de sus redes públicas de agua potable y alcantarillado en los términos establecidos en la legislación sectorial vigente. Tal es así, que en materia de matrices y arranques, existen protocolos en caso de fallas establecidos en el Estatuto Tarifario, aprobado y fiscalizado por la Superintendencia de Servicios



Sanitarios que su representada cumple a cabalidad. Ahora bien, en materia de redes públicas de agua potable, su representada efectúa cabal y oportunamente la renovación de las tuberías cuando estas cumplen su vida útil que, según manual del fabricante, es de 50 años en condiciones extremas de uso, cumpliendo así de manera estricta lo mandado por la ley, sin perjuicio de lo anterior, de manera adicional, también existen medidas de corrección y mantención que van más allá a las establecidas en las Bases tarifarias de Aguas del Altiplano, las cuales nacen al alero del D.F.L. N° 70, Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios.

Indica que las bases tarifarias fijadas para el período 2013-2018 y que en estricto rigor contienen las obligaciones de este contrato que une al prestador y al usuario del servicio sanitario, particularmente en su numeral 4.2.2.8, contiene los estándares para la mantención correctiva de las redes públicas tanto de agua potable como de alcantarillado, estableciendo los tiempos de atención de las emergencias.

Expresa que si bien, el instructivo para la clasificación de atenciones (oficio SISS N° 441, de 12.02.2002) define lo que es atención de emergencia, se requiere que el prestador establezca un estándar de calidad medible asociado a los atributos relacionados con una atención de emergencias realizada con prontitud y en forma permanente.

Arguye que los indicadores son definidos en los siguientes términos: a) Prontitud, tiempo máximo que demora la empresa prestadora desde que recibe una solicitud de emergencia, hasta que ésta es resuelta completamente. Se deberá establecer un estándar para las atenciones de emergencia más frecuentes, pudiéndose separar en tres estándares, el primero comprende el tiempo de demora desde que la empresa es requerida para una emergencia hasta el momento en que la empresa llega al lugar de la emergencia. B) El segundo considera el tiempo de solución provisoria de la emergencia, contado desde terminado el proceso anterior; y el tercero, desde terminada la solución provisoria de la emergencia hasta que ésta es resuelta completamente. El estándar de



calidad deberá ser definido al nivel de empresa, por un período anual y en términos de plazos máximos.

Hace presente que se debe tener en consideración, para la evaluación y definición de estos indicadores, las estadísticas de reclamos efectuados por los usuarios y publicitados en el informe de atención de reclamos del sector sanitario que publica esta Superintendencia.

Sostiene que se adoptaron los siguientes criterios para el caso de fallas de servicio: Letra b) Interrupciones del servicio o daños a la propiedad en redes públicas: a) El tiempo máximo para llegar al lugar de la emergencia será de 2 horas; b) El tiempo máximo para otorgar una solución provisoria a la emergencia será de 6 horas; c) El tiempo máximo para otorgar una solución definitiva a la emergencia será de 2 días.

Replica que en el caso concreto, la parte demandante se limita a señalar genéricamente, que se habrían producido roturas, sin señalar qué obligación culposa se incumple, ya que la misma parte demandante señala como fundante de los hechos negligentes lo expuesto por un oficio emitido por la SISS. Sin embargo, se solucionaron todas las emergencias dentro de los plazos legales. Es decir, en forma irrefutable señala que se cumplió a cabalidad con los estándares establecidos en las leyes y reglamentos que regulan a nuestra representada en su calidad de concesionaria de servicios de alcantarillado y suministro de agua potable.

IV.- Acciones que serían objeto de culpa de parte de su representada, pero que no son tales, ni tampoco dicen relación con los daños supuestamente causados a la propiedad del demandante.

Revela que la contraria señala en su demanda que la demandada incurre en responsabilidad por los siguientes hechos genéricos, que no precisa, ni señala en específico cuales son, solo expone una generalidad que no se condice con los hechos concretos que deben ser objeto de la responsabilidad extracontractual,



párrafo que extrae del libelo en lo pertinente y refiere que más adelante en la demanda, vuelve a señalar genéricamente.

Aprecia que la contraria jamás precisó, ni siquiera señaló qué día o fechas ocurrieron los hechos, ni cuantas fueron las veces en que ocurrieron las roturas que indica, ni como se produjeron, por lo que no se alegaron los hechos cometidos por la parte que demandada que habrían provocado el daño, por ende es lógica conclusión que no puede establecerse nexo causal si no se ha señalado precisamente el o los hechos que lo generan, por lo que no puede existir una causalidad si no se han explicado, ni señalado cuales serían los hechos que la causaron, menos en sede extracontractual, donde según expone la contraria no hay obligaciones contractuales involucradas, por ello la demanda no solo debe ser clara, sino precisa respecto de los hechos generadores del daño, cuestión que no fue relatada en la demanda, siendo una cuestión esencial y principal de la acción del juicio, que no puede subsanarse posteriormente en la etapa de discusión en virtud del tenor expreso del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

Sustenta que siendo los hechos constitutivos de la responsabilidad contractual, precisamente “hechos”, no pueden ser complementados en el escrito de la réplica por la disposición legal expresa ya citada, que acota el señalamiento de hechos solo a la demanda y el derecho, es decir, las acciones opuestas solo pueden ampliarse siempre que no alteren las que sean objeto principal del pleito, ninguna de las circunstancias señaladas ocurre en este caso, por lo que existe una prohibición legal expresa de tomar consideración hechos nuevos que se aleguen en los escritos de réplica.

A su parecer en virtud de lo anterior, la demanda se encuentra mal planteada y sea cual sea el razonamiento del tribunal al dictar sentencia, la demanda debe ser rechazada porque no señala los hechos específicos ni cuando éstos ocurrieron, señalando solo referencias vagas, imprecisas y genéricas que no pueden considerarse como alegación suficiente para acoger una demanda de responsabilidad extracontractual.



V.1.- Es imposible que haya filtrado agua de una matriz y arranques por más de 5 años y que por eso se haya producido un socavón en el suelo que provocó la desestabilización de muro perimetral, radier y los otros daños que alega la contraria en su demanda:

Hace referencia a que sin perjuicio que, y como explicó, la contraria no alegó ningún hecho cierto, sino que solo hizo declaraciones genéricas donde señala que existieron roturas de matrices, arranques y filtraciones, supuestamente, desde el año 2016 hasta la presentación de la demanda. Lo cierto es que, durante el transcurso de todos estos años, solo ha recibido 2 requerimientos que, ni siquiera dicen relación con el inmueble de los demandantes, sino que, un lugar cercano al inmueble señalado por la contraria, éstos corresponden a los siguientes: -Hecho N° 1: Ocurrido con fecha 25 de mayo de 2016 12:10 horas, llega Cuadrilla P0 contratista acude al lugar, realiza inspección y reparación en el acto, llega antes de 2 horas y la solución final o definitiva ocurrió a las 14:19 horas. Cumpliendo con todas las obligaciones de mi representada; -Hecho N° 2: Ocurrido con fecha 21 de diciembre de 2017, la cuadrilla del contratista llega al lugar dentro de las dos horas del llamado y a las 20:24 horas, comienza inspección y reparación. A las 21:52 se terminan los trabajos con solución definitiva, cumpliendo con las obligaciones de mi representada.

Aprecia de lo referido que durante todos estos años, existen solo dos roturas que están ubicadas en sectores cercanos a la vivienda de la parte demandante, por lo que analizaremos estos dos siniestros a fin de determinar el verdadero sentido y alcance de cada uno de ellos y la posibilidad de daños que podría tener cada uno en la propiedad de la demandante:

Expone que en cuanto al siniestro número uno ocurrido el 25 de mayo del año 2016, personal de la demandada llegó antes de dos horas del llamado al lugar, la solución final y definitiva se llevó a efecto 2 horas y 9 minutos después de iniciados los trabajos. Es decir, se cumplió la normativa porque no solo se llegó al



lugar para efectuar las reparaciones dentro de las dos horas siguientes, sino que se entregó una solución definitiva a la reparación de forma muy rápida, el sistema funcionó de forma perfecta, dentro de los períodos del decreto tarifario, entregando un estándar de atención muy superior al señalado en la norma. Ahora bien, respecto de esta rotura de arranque que duró dos horas nueve minutos, después de iniciarse los trabajos, la pregunta que efectúa es, *¿pudo provocarle los daños que alega la contraria esta rotura en unos minutos?*, porque conviene que la rotura se encuentra a cierta distancia del inmueble de la contraria, por lo que el escurrimiento no es tan rápido, ni fácil, por lo que la regla de la lógica de la razón suficiente acogida por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema indica que no se produjo tal daño, más aún cuando se indica que se dio solución definitiva a esta rotura en ese plazo, ni siquiera una solución provisoria. Sobre ello hace presente que el decreto tarifario establece un plazo de 2 días para dar una solución definitiva y esta parte lo hizo en poco más de dos horas.

Manifiesta que en cuanto a la segunda falla ocurrida con fecha 15 de noviembre de 2016, se llegó al lugar dentro de las dos horas, solucionándose definitivamente el mismo día una hora y media después de iniciadas las reparaciones en forma completa y total, por lo que el protocolo de solución definitiva implica un plazo de 2 días, sin embargo, la demandada dio solución definitiva al requerimiento llegando dentro de dos horas y solucionándolo una hora y media después de iniciados los trabajos, cumpliendo con creces la normativa sectorial vigente anteriormente citada. En estas circunstancias, al igual que en el caso anterior, se reparó antes del plazo normativo. Por lo anterior, es claro que no existió culpa en su actuar, quien solucionó la rotura a la brevedad, como se dijo, sin que exista posibilidad que tal rotura hubiere provocado la inhabitabilidad de la propiedad o la ruptura de sus muros perimetrales, radieres, ni los demás como lo dice la contraria en su demanda, careciendo a su parecer de lógica tal aserto. Además, debemos insistir en que no es posible que se haya inundado la propiedad de la demandante, porque esta parte cumplió con los plazos en tiempo



y forma concurriendo al lugar, reparando definitivamente las 2 roturas que ya se señalaron en la presente demanda, por lo que es imposible que pueda existir responsabilidad culposa por esta parte o algún elemento antijurídico que permita la aplicación de la responsabilidad extracontractual, culpa que por lo demás en estos casos debe probarla en virtud del artículo 1698 del Código Civil por quien la alega. En estas circunstancias, de los mismos hechos relatados por la contraria, emana que esta parte ha cumplido todos los protocolos de atención de forma diligente y con el debido cuidado, dejando expresa constancia de todas sus acciones.

Insiste y resalta que, la legislación sanitaria no se pone en la situación de exigir que no se produzcan incidentes de rotura o filtraciones, sino que se cumplan las obligaciones establecidas en el decreto tarifario vigente, las cuales como se ha señalado se cumplen a cabalidad, esto tiene su fundamento en que si se produce una rotura, debe repararse dentro de los plazos establecidos, con lo cual se cumple la obligación de cuidado, pero en ninguna parte de la legislación sanitaria se establece la responsabilidad objetiva, por ello que no existe norma alguna que establezca que las redes no se rompan nunca, sino que todo lo contrario, se establece una responsabilidad de carácter subjetivo, que requiere incumplir las obligaciones de mantenimiento y corrección, establecidas en el decreto tarifario, al alero de la legislación sanitaria, que es la forma en que se plasman las obligaciones sanitarias, documento debidamente autorizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Reitera que se ha cumplido plenamente con todas y cada una de sus obligaciones establecidas en las bases tarifarias cumpliendo por tanto con los estándares establecidos.

A mayor abundamiento, previene que la demandada no ha incurrido en culpa, como lo pretende la demandante, ya que en todo momento ha actuado en los términos o forma establecida en el contrato y en la ley, siguiendo los procedimientos de manera diligente y apegado a la normativa vigente, realizando



todas las actuaciones y gestiones que demandan este tipo de situaciones, por lo que no existe ninguna acción u omisión que implique el incumplimiento de normas legales y menos contractuales.

VI.- No existe falta de mantención de las redes públicas de alcantarillado, ni menos éstas se encuentran en mal estado.

En efecto, el lugar donde se efectuaron las reparaciones, donde la actora indica que existiría mala o falta de mantención, recién tuvo recepción definitiva y fue entregada a Aguas del Altiplano el año 2004 por el SERVIU, siendo las matrices tuberías de PVC 110 milímetros de diámetro que cumplen todas las especificaciones técnicas requeridas por la normativa, cuya vida útil de acuerdo a las especificaciones del fabricante es de 50 años, registrando recién un uso de quince años, por su parte los arranques tienen la misma duración, por lo que ni siquiera se encuentran en la mitad de su vida útil, por ende se trata de materiales que están en buen estado, dentro de su vida útil y que por lo demás el constructor no es la demandada, quien solo se encarga de la mantención al ser la concesionaria de los derechos de aprovechamiento de aguas, pero quien construyó las obras de red pública de alcantarillado y agua potable, obteniendo la recepción definitiva es el Servicio de Vivienda y Urbanización (SEVIU), no ésta parte, por lo que cualquier defecto en la instalación o colocación de las mismas es responsabilidad directa de este organismo, ya que nuestra representada solo se encarga de la mantención de las mismas.

VII.- No procede la indemnización de perjuicios por los supuestos daños que tiene la naturaleza de indirectos, ya que por su causalidad no fueron provocados por la demandada, sino por la mala calidad del terreno donde se efectuó la construcción, que tiene la naturaleza de salino:

VII.1.- Características del suelo salino de Alto Hospicio; medidas constructivas adecuadas para el tipo de suelo:

Como lo reconoce la propia demandante, en Alto Hospicio, el suelo contiene una alta concentración salina, por lo que esta circunstancia pasa a ser un



hecho reconocido por ambas partes. En este sentido, enfatiza que no pueden ser las dos roturas, la causa directa de los daños señalados por la demandante, por los siguientes antecedentes: La ley se ha puesto claramente en la situación que pueden existir o producirse roturas o filtraciones en las tuberías, y de ser de la forma en que lo señala el demandante, este mismo problema lo tendríamos en otras ciudades de nuestro país, específicamente en las del sur de Chile, cuestión que en la práctica no se da; así por ejemplo en ciudades como Valdivia o Temuco que constantemente sufren las inclemencias del mal tiempo en especial por sus fuertes lluvias, las construcciones no sufren daños o grietas a consecuencia de estas precipitaciones, así tampoco sucede con las roturas en el sistema de agua potable, sea interiores o exteriores al inmueble. Además, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado, lo que extrae y cita en lo pertinente, de la causa Rol Excma. Corte N° 5558-2003, caratulados “Pereira con ESSAT”, dictada con fecha 08 de noviembre del año 2004. Es decir, queda claro por la sentencia de la Excma. Corte Suprema, que la calidad en que se construye una vivienda o conjunto habitacional, es de exclusiva responsabilidad del constructor, en el caso concreto del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU). La factibilidad que la empresa sanitaria otorga, solo se refiere evidentemente a una factibilidad técnica de agua potable y alcantarillado, pero en ningún caso se refiere a que la demandada deba efectuar una evaluación del uso del suelo o de la calidad de la construcción que efectuará el organismo constructor respectivo, lo que aparece a todas luces, no sólo fuera del ámbito de competencia de la empresa sanitaria, tal como lo expone la Excelentísima Corte Suprema, sino que también fuera de toda regla de la lógica.

Alega que si la demandante ha sufrido algún tipo de perjuicio o daño, ello no es imputable a esta parte, ni a su conducta, la cual siempre se ha sujetado a la normativa vigente. Es por ello, que el actuar de la empresa Aguas del Altiplano S.A., al encuadrarse dentro de la ley y el contrato, no puede producir daño alguno a la demandante, y si ésta efectivamente lo sufrió, como lo ha manifestado, no



puede ser consecuencia del actuar de la demandada. No existe vínculo alguno entre el daño supuestamente sufrido por la víctima y la conducta de la demandada, la que al apegarse estrictamente a la normativa vigente, hace inexistente el denominado "elemento antijurídico", y ni siquiera se le puede imputar incumplimiento, ni tampoco podrá ser objeto de la presente litis.

Arguye que en el caso concreto, si efectivamente existieren daños a la propiedad, sea estructurales o de otra índole, no es imputable tal conducta a la empresa sanitaria, a quien se le está a todas luces intentando hacer responsable por perjuicios indirectos, que por nuestra legislación civil y nacional no son jamás indemnizables, ya que sólo son indemnizables los perjuicios directos, sea previstos y en algunas circunstancias imprevistos, es así que el autor don Pablo Rodríguez Grez en su libro de Responsabilidad Contractual, página 220 y 221, lo que replica al efecto.

Insiste que es imposible que los daños alegados por la demandante se deban a culpa de la demandada, más aún cabe recordar que todas las instalaciones de agua potable se encuentran dentro de su vida útil, ya que tienen una vida útil de 50 años la cual aún no se cumple, ya que si sólo tomamos en cuenta el nacimiento de la localidad y ahora comuna de Alto Hospicio, no alcanza a tener ni siquiera 20 años desde su nacimiento. No existe obligación o responsabilidad objetiva que obligue evidentemente a indemnizar a la demandada en caso que la matriz o arranque sufra daño, a menos que se establezca que efectivamente esto se debió a un incumplimiento de sus obligaciones.

Señala que en estas circunstancias, en Chile existen una serie de organismos competentes en materia de construcción de viviendas, como el Ministerio de Vivienda y Urbanización, quien tiene a su cargo la adquisición de terrenos, efectuar las subdivisiones prediales, formar loteos, proyectar y ejecutar urbanizaciones, construir viviendas individuales, poblaciones y llevar a cabo remodelaciones. Las Direcciones de Obras Municipales otorgan los permisos, tanto de edificación, como de recepción definitiva de las obras para cualquier



vivienda social. Es un requisito para cada construcción contar con entre otros documentos, una memoria de cálculo estructural y contener el estudio de mecánicas de suelo y los planes de estructura. Además, el proyecto debe contar con un informe favorable de un revisor del proyecto de cálculo estructural, al momento de solicitar el permiso de edificación, el que como se dijo, debe ser presentado a la Dirección de Obras Municipales. Es más, a contar del año 2003, los conjuntos de viviendas cuya construcción hubiere sido contratada por el Servicio de Vivienda y Urbanización y los conjuntos de viviendas sociales de 3 o más pisos deben presentar un proyecto de cálculo estructural a fin de obtener un permiso de edificación. Adicionalmente, a contar de la dictación de la Ley de Calidad de Construcción, el propietario primer vendedor es responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos de ella, sea durante la ejecución o después de terminada. El responsable en estos casos es responsable objetivamente.

Adiciona, que en el caso de las obras del Servicio de Vivienda y Urbanización, las obras que realice mediante contratos de construcción a suma alzada, las bases de la licitación asignan al contratista la obligación de cerciorarse de las condiciones de edificación del terreno donde deban levantarse las viviendas. Ahora, si no ha participado el servicio referido anteriormente, el contratista es responsable de los defectos estructurales de las mismas, especialmente, cuando las bases de la licitación imponen determinadas obligaciones al contratista, como la de cerciorarse de las condiciones de edificación del terreno donde deben levantarse las viviendas. En el caso concreto, atendida la naturaleza de suelo salino, debieron tomarse todas las prevenciones y medidas necesarias en las fundaciones de las viviendas y sistemas de estabilización de suelo y en evitar el escurrimiento de líquidos bajo las propiedades, para que no ocurran situaciones ocasionadas por defecto en construcción, que lleven a la ruina o daño de la propiedad.



Comenta que los defectos en la construcción de casas y edificios, pueden dar diversos casos de responsabilidad, estableciéndose responsabilidades tanto para quien encarga las obras, así como de los profesionales y contratistas que las diseñan y ejecutan. En efecto, la ley expresamente ha contemplado sistemas de responsabilidad para los casos en que exista un problema del suelo, materiales o en la construcción misma, los cuales se encuentran radicados en el constructor. En estas circunstancias, cuando ocurre una ruina total o parcial del inmueble, el responsable es una sola persona en forma exclusiva y excluyente. En el caso concreto, existe un problema de asentamiento de las construcciones en el suelo, no tomando las precauciones necesarias para que éste no ocurra.

Hace alusión a que en nuestro ordenamiento jurídico existen a lo menos dos responsabilidades establecidas para el constructor, el artículo 2003, N° 3 del Código Civil y el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Arguye que sea cual fuere el caso, es decir, la aplicación del Código Civil o la Ley General de Urbanismo y Construcciones, es claro que la persona responsable es el primer vendedor o el constructor, cuando existen problemas con la calidad del suelo o terreno en que se construye o edifica. En estas circunstancias, se atribuye a la demandada la responsabilidad por un tercero responsable y por la propia responsabilidad de la dueña del inmueble, quien no recurrió, ni verificó la calidad de la construcción en relación al suelo en que se construyó, lo cual en todo caso no es responsabilidad atribuible a esta parte.

A su razonamiento el incumplimiento alegado resulta absolutamente ajeno a su representada. Hace que el inmueble de la demandante sea esencialmente vulnerable a cualquier evento derivado de la presencia de escurrimiento de agua en el terreno, cualquiera sea su origen.

Sostiene que en estas circunstancias, no puede haber responsabilidad de Aguas del Altiplano S.A., por cuanto no hay hecho propio del cual responder. Si hay responsabilidad, esta afecta a la propia demandante como propietaria del inmueble, quien debió haber tomado las providencias necesarias para que la



propiedad esté permanentemente protegida ante ésta y otras situaciones que impliquen el escurrimiento de agua y líquidos.

En consecuencia, alega culpa exclusiva de la víctima quien no ha operado de acuerdo los parámetros que se le puede exigir en este tipo de situaciones con los medios idóneos para evitar estos daños que ellos mismos alegan.

Añade que es doctrina constante de los autores que la culpa exclusiva de la víctima exonera de responsabilidad al demandado. En este sentido cita sobre la materia 1) ALESSANDRI, Arturo; Responsabilidad Extracontractual, Pág. 529; 2) MAZEAUD, H.L.J; tomo 2. sexta edición, París, 1970, Pág. 1464; 3) BUSTAMANTE ALSINA, Jorge; Teoría General de la Responsabilidad Civil, Editorial Buenos Aires, octava edición, 1993. La Responsabilité. Conditions, n° 3 87, París 1982, Jaime Santos Briz, La Responsabilidad Civil, t.2, pág. 303 6a, Ed., Madrid 1991; Mañano Yzquierdo Tolsada, Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual pág. 260, Madrid 1993; Jorge Peirano Fació, Responsabilidad Extracontractual, pág. 431, Montevideo 1954.);

A mayor abundamiento, hace referencia a un fallo firme y ejecutoriado dictado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica y confirmado por la Excelentísima Corte Suprema, ciudad que tiene el mismo problema de suelo salino que la comuna de Alto Hospicio, causa Rol N° 53-2004.

Adicionalmente, señala como piedra angular de esta contestación, que es indispensable determinar si el o los supuestos hechos generadores del daño, causaron el daño alegado, ya que desde la fecha de la presentación de la supuesta ocurrencia de los hechos, hasta hoy han ocurrido una serie de eventos de diferente índole, entre ellos principalmente sísmicos, que hace imposible determinar a la fecha si fueron o no si los daños alegados que corresponden a la propiedad de la contraria atribuibles a anteriores o producto de los mencionados sismos que azotaron a nuestra región en el año 2014. Es más existieron lluvias que afectaron varias propiedades en la comuna de Alto Hospicio en el mes de febrero del año 2019. Incluso si se analizan los reclamos en contra de la



demandada, es de octubre de 2020 y el certificado de daños emitido por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio acompañado por la propia contraria, es de fecha 06 de agosto de 2020, es decir, todos los reclamos y accionar de Aguas el Altiplano D.A., y ante la Municipalidad de Alto Hospicio, son todos precisamente en forma posterior a las lluvias de febrero de 2019, por consiguiente será el actor quien deberá acreditar que los supuestos daños, alegados y cuyo origen son el 2020, son consecuencia directa de las supuestas roturas del año 2016 en adelante y no, de otras circunstancias como las importantes lluvias ocurridas en el último tiempo en la región. Lo anterior no es una alegación antojadiza de esta parte, sino que se encuentran fundamentado en la jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, la que por sentencia firme y ejecutoriada en causa caratulados “Inmobiliaria Huayquique con Aguas del Altiplano S.A.” Rol I. Corte C-567-2013, de fecha 28 de noviembre del año 2013, transcribe el considerando quinto de la referida.

Agrega, que esta parte ante este mismo tribunal obtuvo sentencia favorable en causa C-963-2015, caratulada “Araníbar con Aguas del Altiplano S.A.”, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada, que transcribe su vigésimo considerando.

Continúa señalando que, si bien es cierto, existe un certificado de daños emitido por la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio, respecto de la propiedad objeto de la presente demanda, éste no acredita, ni tampoco señala que los daños se produjeron por hechos imputables a su representada y tampoco que exista una relación de causalidad entre las dos fallas que se han señalado en la presente contestación y los daños que dan cuenta los referidos certificados. Por todo lo anteriormente expuesto, al faltar dos requisitos esenciales de la responsabilidad extracontractual, esto es la inexistencia de culpa, habiéndose utilizado la debida diligencia y la ausencia de un nexo causal claro entre el supuesto hecho generador del daño y el daño producido, la demanda debe ser rechazada en todas sus partes. Por último, la contraria indica que esta parte no se habría acercado a



solucionar sus daños sufridos, lo anterior, es efectivo, debido a que como se ha explicado a lo largo de este escrito nuestra representada no causó los daños que alega.

VIII.- Improcedencia de los daños y perjuicios alegados por la demandante:

En cuanto al daño emergente alegado por la contraria: Antes de establecer los antecedentes de fondo de la presente alegación quiere dejar en claro que respecto del demandante no existe perjuicio que pueda ser atribuible a esta parte. Ahora bien, más allá de lo precedentemente señalado, desconoce absolutamente la existencia de algún daño emergente que haya sufrido la demandante por los hechos que imputa, por lo que, los niega y solicita su rechazo.

Para el evento improbable que la actora lograra acreditar lo que sostiene, controvertimos desde ya la valuación del daño emergente.

Hace presente que la parte demandante se limita a exponer que avalúa el daño emergente en la suma de \$ 15.000.000, siendo un hecho público y notorio que el valor de un muro perimetral y la sola reparación de un radier pequeño en la comuna de Alto Hospicio no dice relación con la suma pedida por el demandante, sin exponer como llega al monto de indemnización, qué parámetros ha utilizado para ello, en qué consistió el daño concreto, y otra serie de elementos que podrían ayudar a establecer el daño emergente alegado. Estamos hablando de un daño emergente, por lo que a lo menos el demandante debe señalar cuales fueron esos daños, de qué forma y por qué llegaba a dicho monto. No hacerlo impide que la demandada pueda a su parecer analizarlo, quedando en este punto en la más absoluta indefensión, ya que desconocemos absolutamente, entre otras cosas, de qué forma llegó o calculó dicho valor que demanda.

Alega que en subsidio de la inexistencia del daño emergente, y de la excesiva sobre valuación, respectivamente, solicita que se rebaje el monto a lo que en derecho corresponda conforme la prudencia del tribunal.

Narra que a mayor abundamiento, la contraria no ha acreditado en autos la existencia de permiso de edificación, ni de los certificados de recepción definitiva



de la propiedad cuyos daños se alega, por lo cual en caso de no existir, jamás pudo atribuírsele responsabilidad a mi representada por los posibles daños, ya que se consideran inhabitables de acuerdo al artículo 145 Ley General de Urbanismo y Construcciones. Es por ello, que en caso de no existir la recepción definitiva del inmueble, no existe responsabilidad de mi representada, ya que se trata de una casa que se encuentra totalmente inhabitable, debido a que no cumple la normativa y si éste se produjere, lo sería por exclusiva culpa de la víctima, que no acreditó que obtuvo los permisos, ni las edificaciones para construir, haciendo habitable las casas de forma ilegal.

VIII.2.- En cuanto a la improcedencia del daño moral alegado por la contraria: El daño moral debe ser totalmente rechazado, porque la contraria alega que ha sufrido con vivir en esa propiedad con las filtraciones que ha explicado, por lo que es insostenible que sea acogida la demanda de daño moral. Sin embargo, no explica el porqué, ni como se provoca el daño moral, más aún cuando solo existieron dos ruturas entre el 2016 y la presentación de la demanda, los que quedaron totalmente reparados en poco tiempo, por lo que no puede entenderse como esos hechos pueden provocar en un hombre medio una mella tal en su ánimo que cause un daño moral indemnizable, porque de utilizar ese criterio, haría que cualquier inconveniente común de la vida diaria provocara accionar por daño moral. En estas circunstancias, la parte demandante deberá acreditar el daño moral, el que en el improbable caso de existir no tiene nexo, ni relación causal con el actuar de nuestra representada.

Adicionalmente, en el improbable caso de ser acogidos, deben serlo por montos mucho menores a los demandados.

Concluye que por parte de la demandada se cumplió toda la normativa sectorial, efectuando las reparaciones dentro de los plazos que establece la ley, actuando con debida diligencia, sin incurrir en culpa, además no existe nexo causal entre el daño causado y el hecho generador del daño (supuestas filtraciones), debiendo rechazarse la demanda en todas sus partes.



Por lo expuesto solicita declarar que se rechaza la demanda de autos interpuesta en todas sus partes con expresa condena en costas; y en subsidio, en el improbable evento que el demandante de autos lograra acreditar la existencia de un daño emergente y/o de un daño moral, solicito que se rebaje lo que en derecho corresponda conforme la prudencia del tribunal, al aquilatar las probanzas que rinda la demandante.

A folio 17, comparece don **LUIS PATRICIO RÍOS MUÑOZ**, abogado en representación de la parte demandante evacuando el trámite de réplica, haciendo referencia que en cuanto a las alegaciones y defensas, lo que la contraria indica en el punto 1 y reitera en los puntos 5 y 6, que la demanda debiera ser rechazada en consideración a la inexactitud de los hechos señalados (punto 1), agregando luego que la demanda carece de una exposición clara de los hechos, cuestión que implicaría infracción al N° 4 del Art. 254 del CPC, todo lo cual “*la hacen ininteligible*”, refiere que esa “inexactitud” y falta de inteligibilidad que invoca la contraria no fue objeto de excepción dilatoria alguna, y que la demandada ejerció su derecho a oponer excepción dilatoria por ineptitud del libelo precisamente, sin mencionar en parte alguna lo que ahora indica, por lo que ha precluido su derecho a hacerlo en oportunidades posteriores.

Recuerda que la preclusión es la extinción en un concreto proceso de los poderes jurídico-procesales no ejercitados por los sujetos que intervienen o pueden intervenir en ese proceso, lo que entraña en esencia una extinción que afecta a los derechos, facultades y potestades de que disfrutaban los sujetos intervinientes de un proceso determinado, por su no ejercicio (*Pueden verse al respecto CHIOVENDA, Giuseppe: Ensayos de Derecho Procesal Civil, tomo III, EJE, 1949, pág. 226; COUTURE, Eduardo: Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ª ed., Depalma, 1997, págs. 195- 196; y VALLINES GARCÍA, Enrique, La Preclusión en el Proceso Civil, Thomson Civitas, 2004, pág. 33*), que es precisamente lo que ha ocurrido con la supuesta ineptitud que ahora invoca la contraria, que debió haber hecho presente en la oportunidad correspondiente



(como excepción dilatoria), y al no haberlo hecho, hoy no puede invocarla por haber operado la preclusión a su respecto.

En cuanto al punto 2 de las mismas alegaciones y defensas, yerra la contraria al afirmar que esta parte no ha señalado los hechos que constituyen la responsabilidad extracontractual de su parte, desde que tales hechos han sido señalados clara y expresamente como la falta de mantención permanente, preventiva, operativa, adecuada y oportuna de la red pública de distribución de agua potable. En efecto, en el libelo puede leerse textualmente: *“Entonces, la imputación de responsabilidad la fundamos en la falta de mantención por parte de la empresa sanitaria, de la matriz y tuberías que están ubicadas a un costado de nuestra vivienda, por calle Santa Rosa de Huara. La falta de mantenimiento de estas redes y que ocasionaron no una, sino una serie innumerable de filtraciones de agua desde 2016 hasta la fecha, son imputables a la culpa infraccional de la demandada.”*.

Por su parte alega que en cuanto a la carencia de precisión en las fechas, por mucho que exista un letrado como el suscrito detrás de la defensa de los actores, no se debe olvidar los demandantes son un matrimonio humilde, que no lleva con precisión una agenda de lo que les ocurre en su vida, como sí lleva la contraria un registro de las atenciones y reparaciones que debe hacer, por ser parte de sus labores habituales como concesionaria.

En cuanto a la afirmación del punto 4 de las alegaciones y defensas, de no apreciarse nexo causal entre el hecho generador del daño y el daño mismo alegado –aun cuando anticipa prueba instrumental al respecto, compuesta por el Certificado de Daños N° 094/2020 de 18 de agosto de 2020 de la Dirección de Obras Municipales de Alto Hospicio, el Decreto Alcaldicio N° 2.981/2020 de 21 de septiembre de 2020 de la Municipalidad de Alto Hospicio, el Ordinario N° 4669/2020 de 24 de noviembre de 2020 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y las fotografías notariales acompañadas, pues este es uno de los puntos que ha de ser sometido a prueba, en donde mi parte se esforzará en



demostrar que efectivamente la falta de mantención permanente, preventiva, operativa, adecuada y oportuna de la red pública de distribución de agua potable, fue la que ocasionó las roturas de matriz, la que a su vez, generó las inundaciones al terreno en que se emplaza el hogar de sus representados, causando el daño indicado en el libelo.

Sobre las excepciones perentorias.

En primer lugar, se alega como excepción perentoria por la contraria, una supuesta improcedencia del estatuto de responsabilidad extracontractual, en razón de que la demandada mantiene una relación contractual con los usuarios del sistema de agua potable de la región. Sobre el particular, baste reiterar aquí lo dicho al momento de subsanar la demanda, para despejar toda duda de que tal alegación es improcedente. En efecto, en aquella oportunidad en que se afirmó por su parte que la responsabilidad demandada habría de ser considerada extracontractual, se especificó que, si bien existe entre las partes una relación contractual por ser la demandada la prestadora del servicio de suministro de agua potable, no es en virtud de dicha relación contractual que las une que se generan los daños, perjuicios y menoscabos cuya indemnización se persigue en estos autos; sino en razón de la existencia de un arranque y extensión de matriz que pasa por calle Santa Rosa de Huara, que, producto de fallas en la red pública de agua potable, ha estado generando inundaciones en el terreno en el que se emplaza la casa-habitación de los demandantes, hasta generar la socavación del terreno y hundimiento de éste, generando así daños estructurales al punto que la Dirección de Obras Municipales de Alto Hospicio debió certificar la irreparabilidad de los daños y disponer la demolición parcial del inmueble.

Alude que la justificación de la cita de la normativa sanitaria se debe a que más allá de la relación contractual que existe entre Aguas del Altiplano y cada uno de los propietarios que reciben el suministro de agua potable, la demandada es responsable de la mantención permanente, preventiva, operativa, adecuada y oportuna de la red pública de distribución de agua potable (aquellas instalaciones



exigidas para la urbanización conforme a la Ley, inclusive los arranques de agua potable, operadas y administradas por el prestador del servicio público de distribución, a las que se conectan las instalaciones domiciliarias de agua potable), con el objeto de evitar un perjuicio para la comunidad a la cual van dirigidas sus prestaciones. De esta manera, se invoca lo que en Derecho de Daños se conoce como *culpa contra legalidad* y que consiste en la responsabilidad que nace ante una infracción normativa de la cual se siguen perjuicios.

Conjuntamente con lo anterior, la demandada alega como perentoria la falta de legitimación pasiva de la demandada, lo que resulta también erróneo, por cuanto la legitimación es la aptitud que deben tener el sujeto activo y pasivo de un proceso, para ser demandante y demandado respectivamente; esto es un requisito subjetivo cuya existencia depende de una cierta vinculación de las personas que se presentan como parte (actor, demandado, tercero interviniente) con la situación jurídica material a la que se refiere la pretensión procesal, siendo la legitimación pasiva la vinculación del demandado con la situación jurídica a la que se refiere la pretensión, en virtud de la cual, si el actor alega y prueba los hechos que sustentan tal vinculación, podrá obtener frente a ese demandado la tutela judicial que ha pretendido, esto es, determinar frente a quien ha de ser pretendido ese pronunciamiento para que la pretensión sea eficaz (ORTELLS RAMOS, Manuel [et al.], *Derecho Procesal Civil*, 16ª ed., Aranzadi, Navarra, 2017, págs. 125-141). En tal sentido, el relato contenido en la demanda es esencial para determinar la legitimación pasiva, y conforme el relato que compone nuestra pretensión, la demandada tiene legitimación pasiva desde que Aguas del Altiplano es la responsable de la red pública de distribución de agua potable.

Refiere que la siguiente excepción perentoria es que la demandada habría actuado con la debida diligencia en la mantención de las redes de alcantarillado, afirmación que controvierten en su totalidad y que habrá de ser comprobada por su actividad durante el término probatorio, por lo que a su entender no merece mayores comentarios aquí.



Narra que luego titula la siguiente excepción perentoria de la siguiente manera: *“Acciones que serían objeto de culpa de parte de nuestra representada, pero que no son tales, ni tampoco dicen relación con los daños supuestamente causados a la propiedad del demandante.”*, volviendo sobre la falta de indicación de fechas en que ocurrieron los hechos, cuestión a la que ya nos hemos referido en el punto 3 de esta réplica, recalcando que los demandantes son un matrimonio de humilde condición, que no lleva con precisión una agenda de lo que les ocurre en su vida, como sí lleva la contraria un registro de las atenciones y reparaciones que debe hacer, por ser parte de sus labores habituales como concesionaria.

Precisa que continúa la contraria en este punto, precisando que: *“durante el transcurso de todos estos años, la demandada sólo ha recibido 2 requerimientos que, ni siquiera dicen relación con el inmueble de los demandantes, sino que, un lugar cercano al inmueble señalado por la contraria...”*. Aquí queda de manifiesto la falta de comprensión de los hechos por parte de la contraria, puesto que en ninguna parte del libelo ni de su subsanación se indica que la rotura se produjo en el inmueble de mis representados (por ello además, es que la responsabilidad demandada no es contractual), sino en una matriz que colinda a su propiedad. A mayor abundamiento, la contraria guarda silencio respecto de la denuncia que efectuaran mis representados el 22 de octubre de 2020.

Luego, ha de considerar que se refiere sólo a los requerimientos recibidos durante todos esos años, lo que constituye una confesión escrita de su parte que deja en evidencia que Aguas del Altiplano sólo ha concurrido al lugar dos veces en todos estos años, únicamente cuando se han generado grandes filtraciones, pero no señala ninguna visita ni reparación preventiva. En esa misma línea argumentativa, llama la atención la cercanía entre las dos visitas a reparación que ha debido efectuar la demandada, entre mayo de 2016 y diciembre de 2017, lo que deja de manifiesto que la matriz requiere mantención preventiva al menos cada año y medio para evitar filtraciones y/o roturas, cuestión que no ha ocurrido. A continuación, la contraria realiza lo que en argumentación jurídica se ha



denominado *falacia*, al llegar a conclusiones incorrectas con apariencia de razonamiento correcto, derivadas de falsas premisas, según detalla.

La siguiente excepción perentoria invocada, si bien en el título habla de que no existe falta de mantención de las redes públicas, y que no están en mal estado, el fundamento propio de esta excepción pretende endosar la responsabilidad al SERVIU, por ser dicho servicio público el que realizó la instalación de las mismas. Valga aquí recordar que la concesión vigente que mantiene la demandada la obliga a la mantención de todas las redes del sistema, sin distinguir quien haya sido el instalador de las mismas. No hay mucho más que agregar a este punto.

Relata que luego, se refiere a la improcedencia de la indemnización de perjuicios, invocando como argumento para ello, la *“mala calidad del terreno donde se efectuó la construcción, que tiene naturaleza de terreno salino”*, invocando para ello fallos de dos décadas atrás, en donde el criterio jurisprudencial no había evolucionado a lo que es hoy en materia de daños. Sobre este punto, anticipándonos a lo que diría la demandada al respecto, ya explicamos en el libelo que el suelo en la comuna de Alto Hospicio es sumamente duro, lo cual se puede verificar ejerciendo presión picando con herramientas caseras, en algo más de 15 centímetros debajo del suelo, encontrándose una enorme resistencia; pero si se deja escurrir agua se apreciará que se ablanda el terreno como sucede en la mayoría de los suelos, sean salinos o no. En otras palabras, no es la calidad del suelo de Alto Hospicio, sino la falta de mantención preventiva y las roturas de matriz y el consecuente escurrir de las aguas, los que provocan el agrietamiento y colapso estructural de las viviendas.

Por otra parte hace referencia a que la contraria invoca como excepción perentoria, la improcedencia de los daños demandados, cuestionando primeramente el quantum de éstos. Aquí cabe recordar que al momento de precisar los daños directos, se tuvo en consideración (y se acompañó en un otrosí de la demanda) presupuesto elaborado por una empresa constructora, que si bien



es meramente ilustrativo, y no tiene valor a menos que sea reconocido en juicio por quien lo confeccionó, permite desmentir que la determinación del monto demandado haya sido antojadiza.

A su entender, la demandada pretende desentenderse de su responsabilidad al acusar una supuesta ilegalidad en las construcciones. Al respecto, si bien no desconoce el texto del Art. 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, tampoco ha de olvidar que en razón del principio de primacía de la realidad, es que el legislador cada determinados períodos (aproximadamente, cada lustro) saca una ley popularmente denominada “ley del mono”, con las que se regularizan las edificaciones que carecen de los permisos administrativos indicados, con lo cual el legislador reconoce la existencia de tales edificaciones.

Finalmente relata, que dentro de la misma excepción perentoria anterior, pide el rechazo del daño moral, afirmando que esta parte lo estaría reclamando por el sufrimiento provocado por tener que vivir en la propiedad con las filtraciones. A su parecer esto es una tergiversación de lo señalado en el libelo, lo que cita textual y sobre lo cual dice no se habla de filtraciones ni de daño moral generado por tales filtraciones o roturas de matriz, sino de daño estructural de la vivienda, que ha sido declarada riesgosa para la vida por la autoridad municipal competente, y que no han podido trasladarse a otro lugar, dadas sus precarias condiciones, pues no cuentan con la situación económica que les permita irse a otro lugar mientras el inmueble fuere reparado. En otras palabras, no estamos hablando de que exista angustia porque fluya el agua en la calle, sino porque los socavones que las aguas escurridas provocaron en el terreno en que se emplaza el inmueble que sirve de casa-habitación a los demandantes, generó un daño estructural al mismo, transformando esta casa-habitación en una obra ruinosa, que pone en peligro la vida de quienes la habitan.

A folio 19, comparece don **ROBERTO BAEZ CASTILLO**, en representación de la demandada, evacuando el trámite de duplica ratificando y



haciendo valer nuevamente los argumentos de hecho y de derecho expuestos en la contestación de la demanda, haciendo presente además que es claro que la excepción de improcedencia del estatuto de responsabilidad extracontractual es una excepción perentoria, es decir, una alegación de fondo, que no dice relación alguna con la excepción dilatoria opuesta, a la que se allanó la contraria, lo que se ataca en el caso concreto corresponde a que la demanda incurre en un error en la calificación jurídica de los hechos, aplicando un estatuto jurídico improcedente.

Arguye que en el escrito de réplica, queda de manifiesto la falta de señalamiento de hechos concretos que fundamenten la demanda de responsabilidad extracontractual interpuesta y cualquier hecho nuevo alegado en la réplica debe ser desestimado, porque la ley no permite en dicha instancia procesal modificar los hechos, ni las acciones que son objeto principal del pleito, las que quedan determinadas en la demanda, que enmarca el ámbito de la discusión del juicio.

A folio 25, consta el llamado a las partes a conciliación, el cual no prosperó.

A folio 27, se recibió la causa a prueba.

A folio 65, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece don **CLAUDIO ROBERTO VERDUGO MUÑOZ**, mecánico diesel, en representación de su cónyuge doña **NANCY GABRIELA ZAMORA CAYO**, labores de hogar, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra de **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, representada indistintamente por Christian Sayel Barahona Rubio y/o don Nivaldo Guillermo Gatica Fuentes, ambos ya individualizados, solicitando se acoja a tramitación y en definitiva se declare que la demandada es responsable por los perjuicios ocasionados y, en consecuencia, la condene al pago de las sumas ya detalladas por concepto de daño patrimonial directo \$15.000.000. y daño moral



\$20.000.000.-, por las razones indicadas, más intereses y reajustes, o al monto que el tribunal estime procedente fijar para tales indemnizaciones conforme el mérito del proceso; y en todo caso, que se le condene al pago de las costas de la causa, por los motivos expuestos en lo expositivo.

SEGUNDO: Que a folio 15, comparece don **CHRISTIAN BARRERA PERRET** y don **ROBERTO BAEZ CASTILLO**, abogado, en representación del demandado **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, quien contesta la demanda de indemnización de perjuicios, solicitando, por las razones ya expresadas en la parte expositiva, sea rechazada íntegramente la demanda, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que a folio 17, la demandante evacúa el trámite de réplica en los términos señalados en la parte expositiva.

Que a folio 19, la demandada evacúa el trámite de dúplica en los términos señalados en la parte expositiva.

CUARTO: Que, la demandante, para acreditar su pretensión, rindió las siguientes probanzas:

Instrumental.

A folio 1:

1) Certificado de Daños N° 094/2020 de 18 de agosto de 2020, emanado de la Dirección de Obras Municipales de Alto Hospicio; **2)** Decreto Alcaldicio N° 2.981/2020 de 21 de septiembre de 2020, emanado de la Municipalidad de Alto Hospicio; **3)** Carta de fecha 22 de octubre de 2020, de doña Nancy Zamora Cayo dirigida a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a Aguas del Altiplano; **4)** Carta CAC/IQQ N° 85 de 16 de noviembre de 2020, emanada de Aguas del Altiplano; **5)** Ord. N° 4669/2020 de 24 de noviembre de 2020, emanado de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Oficina Regional de Tarapacá; **6)** Acta levantada por Notario Público de Alto Hospicio, don Darío Chacón Vicentelo, con cuatro fotografías adjuntas, al día 20 de enero de 2021; **7)** Certificado para fines especiales, emitido el 30 de agosto de 2016 por el Director de Obras Municipales



de Alto Hospicio; **8)** Presupuesto elaborado el 23 de octubre de 2020, por Constructora Iquique Ltda; **9)** Certificado de matrimonio entre Claudio Roberto Verdugo Muñoz y Nancy Gabriela Zamora Cayo.

A folio 36:

Siete Informes de Sanciones cursadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Testimonial:

A folio 41, constan las declaraciones de don Hugo Rolando Rojas Verdejo y de don René Leopoldo Rivas Pacheco.

Otra prueba:

1) Oficio N° 158-2022 de la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio a folio 44; 2) Ordinario N° 1498 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de fecha 17 de mayo del año 2022, a folio 50.

QUINTO: Que, la parte demandada rindió las siguientes probanzas:

Instrumental.

A folio 42:

1) Copia del oficio Ordinario número 73, de 9 de enero de 2014, suscrito por la Superintendente de Servicios Sanitarios; **2)** Manual Tuberías y Fittings HDPE, emitido por el fabricante DURATEC – VINILIT S.A; **3)** Ejemplar de “Bases Definitivas Estatuto Tarifario Empresa de Servicios Sanitarios Aguas Del Altiplano S.A.”, (Mayo 2012), elaborado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para el período 2013-2018; **4)** Manual de uso y Mantenición de la Vivienda, Región de Tarapacá, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, año 2007; **5)** Informe número 612.685-A, sobre Lineamientos para determinación de Colapsabilidad de suelos por disolución de sales del IDIEM; **6)** Información geológica de la comuna de Alto



Hospicio, Geología y suelos salinos, SERNAGEOMIN; 7) Ficha 16 elaborada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios; 8) Manual del cliente, emitido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

SEXTO: Que, como medida para mejor resolver, se incorporó copia de inscripción y certificado de dominio vigente y de hipotecas y gravámenes, a folio 68.

En cuanto a la alegación que los hechos de la demanda, se refieren a responsabilidad contractual y no extracontractual.

SEPTIMO: Que del estudio de los hechos narrados en la demanda, aparece que la responsabilidad extracontractual reclamada por la demandante, deriva de una supuesta falta de mantenimiento y reparación permanente y oportuna del "sistema sanitario", particularmente producto la existencia de un arranque y extensión de matriz que pasa por calle Santa Rosa de Huara, y producto de fallas en la red pública de agua potable, ha estado generando inundaciones en su terreno desde el año 2016 en adelante, al punto que en el año 2020, llegó a deteriorar y socavar el suelo de su inmueble, tornando que el muro perimetral poniente del patio de su vivienda, sea un peligro, decretándose su demolición por parte de la Municipalidad de Alto Hospicio. Aquello se refiere específicamente a fallas en las redes públicas que comprende la distribución de agua potable y/o recolección de aguas servidas, las cuales se encuentran definidas en las letras e), f) y n) del artículo 53 de la Ley General de Servicios Sanitarios, encontrándose regulado el cumplimiento de dichas obligaciones en la legislación y reglamentos atinentes a la actividad sanitaria, por lo que se puede concluir que las infracciones denunciadas, no devienen en el vínculo usuario-prestador de servicios sanitarios, sino que dice relación con la observancia de la conducta impuesta legal y reglamentariamente al desarrollo de tal labor, ya que no es en virtud de dicha relación contractual, que supuestamente se generan los daños, sino producto de las fallas de la red pública de agua potable, fuera de su domicilio, por lo que corresponde analizar la acción bajo la luz del régimen de responsabilidad



extracontractual, rechazándose en consecuencia la alegación de la demandada en torno a que la responsabilidad civil, que debe analizarse en autos es la contractual.

En cuanto a la falta de legitimación pasiva.

OCTAVO: Que la legitimación *ad causam* o *en la causa* es la vinculación que tienen las partes de un proceso concreto con la relación jurídica substantiva sobre que éste recae y que habilita a una de ellas para asumir la posición de demandante y coloca a la otra en la necesidad de soportar la carga de ser demandado, vale decir, determina si un sujeto es el genuino demandante (legitimación activa) o el genuino demandado (legitimación pasiva) en una causa o juicio en concreto.

Despejado lo anterior, de acuerdo al mérito del proceso, la que nos convoca conocer en el juicio de marras es la legitimación pasiva en o para la causa.

Que, en la especie, el actor comparece a estos estrados demandando en síntesis la responsabilidad extracontractual que le cabe al demandado por no cumplir con sus obligaciones legales de mantener la red pública de agua potable en buen estado, en el sector santa Rosa, lo que ha generado inundaciones en el sector que han provocado el socavamiento del terreno de su propiedad, como se dijo en el motivo anterior, los que no devienen en el vínculo usuario-prestador de servicios sanitarios, sino que dice relación con la observancia de la conducta impuesta legal y reglamentariamente al desarrollo de tal labor.

Que, en este sentido, el artículo 2314 del Código Civil señala que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización. Así las cosas, se concluye que por regla general quien puede deducir la acción o legitimado activo es por regla general el que ha sufrido el daño y el legitimado pasivo es el que ha cometido el delito o cuasidelito.

En consecuencia, concatenando lo asentado precedentemente, en el sentido que se invocó un hecho ante este juez, el que se encuentra protegido por



la norma legal solicitada, la que ha sido ejercida por el titular del derecho en contra de la persona jurídica obligada, se colige que la demandada cuenta con legitimación pasiva para ser demandada en autos, por lo que preciso resulta rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la demandada.

Que atendido al hecho que las demás alegaciones y excepciones relativas a: Inexistencia de responsabilidad extracontractual; que las Acciones que serían objeto de culpa de parte de su representada, pero que no son tales, ni tampoco dicen relación con los daños supuestamente causados a la propiedad del demandante; la imposibilidad que haya filtrado agua de una matriz y arranques por más de 5 años y que por eso se haya producido un socavón en el suelo que provocó la desestabilización de muro perimetral, radier y los otros daños que alega la contraria en su demanda; la no existencia falta de mantención de la red pública; que no procede la indemnización de perjuicios por los supuestos daños que tiene la naturaleza de indirectos, ya que por su causalidad no fueron provocados por la demandada, sino por la mala calidad del terreno donde se efectuó la construcción, que tiene la naturaleza de salino; Características del suelo salino de Alto Hospicio; medidas constructivas adecuadas para el tipo de suelo, improcedencia del daño emergente y moral, versan sobre la concurrencia de los elementos de la responsabilidad extracontractual, estas serán resueltas cuando corresponda su estudio, para que la sentencia mantenga un orden adecuado.

En cuanto al fondo:

NOVENO: Que para resolver la controversia jurídica debemos tener presente además lo siguiente, que la concesión de servicios sanitarios, tiene por objeto permitir el establecimiento, construcción y explotación de los servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable, recolectar y disponer de las aguas servidas, conforme se desprende de los artículos 1 N°1 y 7 del D.F.L 382 del año 1988 Ley General de Servicios Sanitarios.



Por su parte, el artículo 34 del referido cuerpo legal señala que el prestador estará obligado a garantizar la continuidad y calidad de los servicios, los que sólo podrán verse afectados por fuerza mayor, y establece categóricamente en su artículo 40 que el propietario del inmueble es obligado a la mantención de las instalaciones interiores domiciliarias de alcantarillado y agua potable, por lo que la red pública de distribución aparece sólo de responsabilidad del concesionario.

En tal sentido, el artículo 36 bis del D.F.L. 382, dispone: "Será obligación de los concesionarios mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el reglamento, el cual deberá estar basado en criterio de carácter general y haberse dictado antes del otorgamiento de la concesión".

A su turno, el artículo 98 del Reglamento de las Concesiones Sanitarias de Producción y Distribución de Agua Potable y de Recolección y Disposición de Aguas Servidas y de la Normas Sobre Calidad de Atención a los usuarios de estos Servicios, dispone: "El sistema de distribución de cualquier servicio de agua potable deberá ajustarse a lo establecido en la norma chilena NCh 691 "Agua Potable - Conducción, Regulación y Distribución".

En tanto, la referida a los sistemas de recolección de aguas servidas deberá cumplir con la norma chilena Nch 1105 "Alcantarillado de Aguas Residuales -Cálculo y diseño de redes".

Así, la norma chilena N°691, indica en su punto 8.3.1. que: "las tuberías de agua potable se deben instalar cumpliendo con lo establecido en NCh 1360 y NCh 2811", y en el apartado 9.1, establece que, entre otros aspectos, la selección de los materiales a utilizar en éstas, debe considerar la calidad del agua y del terreno, así como la demanda de la red. En tal sentido, la norma chilena N°1360, en el acápite 5.1.6. Prescribe que: "en los casos de instalaciones de sistemas de tuberías en suelos salinos de estructura colapsable, se deben considerar las condiciones especiales para su instalación conforme a lo especificado en el



estudio de mecánica de suelos e instrucciones de la Autoridad Estatal correspondiente".

Finalmente, el artículo 99 del Reglamento antes referido, preceptúa: "El prestador deberá tener en aplicación un programa permanente de mantención preventiva de sus redes de alcantarillado. Igualmente, el prestador tendrá la obligación de mantener disponible y sin interrupción la red pública para la evacuación de las aguas servidas provenientes de los inmuebles, de modo que tal red no produzca inundaciones, filtraciones, daños u otros efectos, salvo causa de fuerza mayor, desperfectos causados por el mal uso o ejecución defectuosa de la instalación domiciliaria no imputable a la empresa".

En consecuencia, acorde a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas, las empresas de servicios sanitarios tienen el deber de mantención permanente, preventiva, operativa, adecuada y oportuna de la red pública de distribución y recolección de aguas, con el objeto de evitar un perjuicio para la comunidad a la cual van dirigidas sus prestaciones, debiendo considerar en su instalación, y consecuentemente, en su mantención, la especial característica de encontrarse emplazada las redes y tuberías en suelo salino de estructura colapsable.

En cuanto a los elementos de la responsabilidad extracontractual.

DECIMO: Que, la responsabilidad extracontractual demandada está contenida en el artículo 2314 del Código Civil, que dispone: *"El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de las penas que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito"*.

En este sentido, en base a lo previsto en los artículos 2284, 2314 y 2319 del Código Civil, la doctrina ha señalado que los elementos para la concurrencia de la responsabilidad extracontractual son:

1. La existencia de un hecho u omisión que provenga de dolo o culpa del autor.



2. Que el autor sea capaz de delito o cuasidelito civil.
3. Que el hecho u omisión cause un daño a la víctima.
4. Que entre el hecho u omisión doloso o culpable y el daño causado exista una relación de causalidad.

DÉCIMO PRIMERO: Que, respecto al primer elemento de la responsabilidad extracontractual, esto es, la acción u omisión culpable del agente, resulta útil anotar que del tenor de la demanda se desprende que los hechos que sirven de fundamento a la misma, consisten en que a partir del año 2016, ocurrieron una serie de situaciones anómalas, provenientes de diversas roturas de matriz y fallas del sistema sanitario y que al llegar el agua al patio del inmueble de la demandante, este se socavó, generando el hundimiento del muro perimetral, del portón y del radier, de su casa, los que habrían provocado daños estructurales en la propiedad de la demandante ubicada en Pasaje Villa Hermosa N°4350 de la comuna de Alto Hospicio, declarándose finalmente que el muro perimetral poniente de su vivienda sea un peligro, ordenándose su demolición por parte de la Ilustre Municipalidad de dicha comuna con fecha 21 de septiembre del año 2020.

Que a fin de acreditar el elemento de la responsabilidad, que se analiza, obra en los autos los siguientes antecedentes:

1.-Del certificado de dominio vigente emitido con fecha 22 de julio de 2022 y de la copia de inscripción de dominio acompañadas a folio 68, ponderados conforme lo dispone el artículo 342 N°2 en relación al artículo 1700 del Código Civil, la que hace plena prueba, se desprende que el Lote N° 1 del Conjunto Habitacional “Villa Hermosa” de la Comuna de Alto Hospicio, inscrito a fojas 1035 vuelta N° 1738 del registro de Propiedad del año 2011, es de propiedad de la demandante doña Nancy Gabriela Zamora Cayo.

2.- De la copia del Certificado de Daños N° 094/2020 de 18 de agosto de 2020, emanado de la Dirección de Obras Municipales de Alto Hospicio, acompañada a la demanda a folio 1, apreciado conforme lo dispone el artículo 342



N° 3 en relación al artículo 1700 del Código Civil, la que hace plena prueba, se desprende que el muro perimetral poniente del sector del patio del inmueble ubicado en pasaje uno N° 4350, Lote 1, Loteo del conjunto habitacional “Villa Hermosa”, de la comuna de Alto Hospicio, inmueble de propiedad de la Sra. Nancy Gabriela Zamora Cayo, se encuentra en condición de irreparable, por la gravedad del terreno que afectaría a los elementos estructurales de la vivienda, esto provocado por el socavamiento del suelo provocando el asentamiento diferencial del terreno, lo que constituye un peligro para sus habitantes.

3-. Decreto Alcaldicio N° 2.981/2020 de 21 de septiembre de 2020, emanado de la Municipalidad de Alto Hospicio de folio 1, apreciado conforme lo establece el artículo 342 N° 3 en relación al artículo 1700 del Código Civil, la que hace plena prueba, en el que se dispone la demolición parcial del muro perimetral poniente del inmueble ubicado en pasaje uno N° 4350, Lote 1, Loteo del conjunto habitacional “Villa Hermosa”, de la comuna de Alto Hospicio.

4.- del oficio N° 158, emanado del director de obras municipales de Alto Hospicio, de folio 44, que da cuenta que de la revisión de los antecedentes de la inspección de la vivienda ubicada en el pasaje uno N° 4350 del conjunto habitacional villa hermosa de la comuna de Alto Hospicio, se enmarca a requerimiento de folio 36 de fecha 3 de mayo de 2022, en el punto 2.2 de la causa rol 2077-2021 del Primer juzgado de letras de Iquique, el que solicita informar las razones que produjeron el socavamiento del terreno de la vivienda en comento. En la revisión del inmueble participo el arquitecto de dicha Municipalidad Pedro Mella Díaz y en el lugar se constató la presencia de un asentamiento diferencial del muro perimetral poniente, el que se emplaza en el patio de la vivienda, asentamiento que se origina por filtraciones generadas por las redes sanitarias en la vía Pública (calle santa rosa de huara.) el que es apreciado conforme lo dispone el artículo 342 N° 3 en relación al artículo 1700 del Código Civil, la que hace plena prueba.



Que de la testimonial de folio 41, que en síntesis se extrae de lo declarado por el testigo Hugo Rojas Verdejo, que hace 25 años que vive en el sector, que los daños corresponden a las fotografías acompañadas en autos. Que los mismos provienen de la rotura de matriz y las filtraciones, lo que provocó que se quebraran las panderetas incluso el agrietamiento del patio de cemento de la casa. No existiendo mantención por parte de Aguas del altiplano.

Por su parte de la declaración del testigo Rene Rivas Pacheco, en síntesis se extrae que, las cañerías son viejas, que las reparaciones efectuadas son menores, y que no cambian las mangueras. Que se producen pozas con barro por las filtraciones, siendo de tal magnitud la humedad que provocó que la pandereta se cayera a pedazos. De hecho el dueño del lugar en que trabaja tuvo que poner panderetas nuevas por el peligro que implicaba.

Que hace 13 años que trabaja en una empresa de seguridad en el sector y pudo ver como se hundieron las panderetas y las latas por la humedad. Por su parte señala no haber visto mantenciones por la demandada que incluso era tal la magnitud del agua para el otro lado.

Que las declaraciones de dos testigos que reúnen los requisitos del artículo 384 N°2, del Código de Procedimiento Civil, por lo que hacen plena prueba del hecho de que en el sector que se indica en el libelo se han producido filtraciones y que estas han generado daños al inmueble de autos.

Que de los antecedentes antes reseñados, analizados en conjunto, emanan presunciones que por reunir los caracteres de graves, precisas y concordantes, conforme lo dispone el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1712 del Código Civil, permiten tener por establecido que:

Que al menos en los últimos años existen fallas en la red pública de distribución de agua potable y/o aguas servidas, consistente en fugas de agua producto de la rotura de una matriz aledaña al inmueble de propiedad de la demandante, lo que provoco un asentamiento diferencial del muro perimetral



ponente, el que se emplaza en el patio de la vivienda de los demandantes, asentamiento que se origina por filtraciones generadas por las redes sanitarias en la vía Pública, la que se declaró en condición de irreparable, lo que constituye un peligro para sus habitantes, de acuerdo al certificado de daños 094/2020, emanado de la dirección de obras municipales de Alto Hospicio y mediante el decreto alcaldicio 2981/2020, de la Municipalidad de Alto Hospicio se dispone la demolición parcial del muro perimetral poniente del inmueble ubicado en el pasaje uno N° 4350 del conjunto habitacional villa Hermosa de la comuna de Alto Hospicio.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, establecida entonces la ocurrencia de un hecho ilícito, toca dilucidar seguidamente si ha existido culpa de parte de su autor, conforme a la teoría subjetiva que sigue el Código de Bello. En este sentido los hechos asentados en el motivo anterior, permiten concluir que Aguas del Altiplano infringió las normas de los artículos 40 de la Ley de Servicios Sanitarios y 99 del Reglamento, al no dar cumplimiento a su deber de realizar una mantención y atención de la red pública preventiva, de manera oportuna, adecuada y continuada; en consecuencia, si la demandada Aguas del Altiplano hubiese empleado la diligencia y cuidado que le eran exigibles, adoptando las medidas adecuadas y oportunas de reparación o de renovación de las uniones de las cañerías que estaban en mal estado, éstas no se habrían fatigado al punto de fracturarse, produciendo la filtración de agua desde la vía pública que dañó el inmueble.

Que bajo estas circunstancias, la empresa sanitaria ha incurrido en una conducta ilícita que toca calificar de negligente (culpa por omisión), ya que de acuerdo a su experiencia en el rubro, debió prever los efectos que produciría una rotura de matriz no atendida en tiempo y forma y con ello las consecuencias de no efectuar las mantenciones y/o cambios en las cañerías o ductos de agua, sobre todo considerando el socavón formado en la calle aledaña a la propiedad de la



demandante que inexorablemente afectarían los cimientos del inmueble, lo que llevo a que se declarara irreparable el muro perimetral por la Municipalidad de Alto Hospicio. En este sentido, la demandada debió adoptar, por una parte, las medidas tendientes a reparar en forma inmediata la fractura de la matriz a fin de poner término definitivo a la filtración de agua que permaneció activa por mucho tiempo, por lo menos hasta la fecha de presentación de la demanda, como también desplegar las medidas preventivas de resguardo que fueran útiles y eficaces para ejecutar las labores de reparación pertinentes, por ejemplo utilización de maquinaria apropiada, moldaje, relleno, apuntalamiento y socalizado de fundaciones técnicamente apropiadas, entre otras, acordes con la naturaleza y dimensiones del socavón, considerando los riesgos que podía entrañar para el estado de conservación del inmueble de la demandante. Al no hacerlo, su actuar no puede ser considerado inocuo o carente de relevancia jurídica; por el contrario, de acuerdo con las exigencias de cuidado contenidas en las normas reglamentarias citadas precedentemente, la conducta de la empresa demandada debe ser calificada de negligente o descuidada, ya que no obstante conocer las condiciones de suelo que enfrentaba, no desplegó las acciones necesarias para reparar la rotura de matriz en tiempo y forma, para evitar la formación del socavón que daño los cimientos del inmueble, aceptando de esta forma la ocurrencia de las consecuencias dañosas.

Que lo asentado precedentemente no fue desvirtuado de ninguna manera en autos por la demandada, quien tenía la carga de hacerlo, conforme lo expresa el artículo 1698 del Código Civil, por lo que preciso resulta rechazar todas las alegaciones y defensas del demandado en ese sentido.

Que es menester señalar que la demandada no acreditó de ninguna manera en autos, siendo de su carga hacerlo, que no fueron las filtraciones las que provocaron los daños en el inmueble de los actores, por lo que preciso resulta rechazar esa alegación o defensa en ese sentido.



Así las cosas, se tiene por acreditada la concurrencia del primer elemento de la responsabilidad extracontractual.

DECIMO TERCERO: Que, habiéndose establecido la existencia de un hecho u omisión que proviene de dolo o culpa del autor, en la forma señalada en el fundamento precedente, y siendo la demandada una persona jurídica, capaz de cometer un delito o cuasidelito civil, y que responde civilmente de los hechos dañosos causados por quienes trabajan o se desempeñan a su cargo en actividades y faenas propio de la empresa, lo que constituye la regla general en materia de responsabilidad extracontractual, no probándose la situación contraria en la causa, entonces se debe determinar la concurrencia del tercer elemento de la responsabilidad extracontractual, esto es, que el hecho u omisión ocasione daño a la otra parte.

Que, en la especie, el daño consiste en los perjuicios provocados al inmueble de propiedad de una de las demandantes, lo que se acredita en autos con la copia del Certificado de Daños N° 094/2020 de 18 de agosto de 2020, emanado de la Dirección de Obras Municipales de Alto Hospicio y Decreto Alcaldicio N° 2.981/2020 de 21 de septiembre de 2020, emanado de la Municipalidad de Alto Hospicio de folio 1, el oficio N° 158, emanado del director de obras municipales de Alto Hospicio de folio 44, la inscripción de dominio acompañada a folio 68, los que apreciados conforme lo dispone el artículo 342 N° 3 en relación al artículo 1700 del Código Civil, hacen plena prueba del hecho que el inmueble de propiedad de uno de los demandantes, ha registrado daños en su estructura, el que se encuentra en condición de irreparable, por la gravedad del terreno que afectaría a los elementos estructurales de la vivienda, esto provocado por el socavamiento del suelo provocando el asentamiento diferencial del terreno, lo que constituye un peligro para sus habitantes y que según el Decreto Alcaldicio N° 2.981/2020 de 21 de septiembre de 2020, emanado de la Municipalidad de Alto Hospicio, dispone la demolición parcial del muro perimetral poniente del inmueble, acreditándose en autos el elemento analizado.



Que es menester señalar que la demandada no acredita en autos que los daños provocados al inmueble sublite, se deban por haber sido construida esta en suelo salino, ni la existencia de defectos en los materiales de construcción o sismos ocurridos en la región, siendo de su carga hacerlo conforme al artículo 1698 del Código Civil y a su turno la demandante logro acreditar en la causa que los daños se deben a las filtraciones de la red pública de agua potable, que hizo que el inmueble perdiera capacidad de soporte, por lo que preciso resulta rechazar esa alegación o defensa en ese sentido.

DECIMO CUARTO: Que, en cuanto a la concurrencia del cuarto elemento de la responsabilidad extracontractual, esto es, que entre el hecho u omisión doloso o culpable y el daño causado exista una relación de causalidad.

Que del mérito de la prueba de la demandante en especial con la copia del Certificado de Daños N° 094/2020 de 18 de agosto de 2020, emanado de la Dirección de Obras Municipales de Alto Hospicio y Decreto Alcaldicio N° 2.981/2020 de 21 de septiembre de 2020, emanado de la Municipalidad de Alto Hospicio, la inscripción de dominio acompañada a folio 68, el oficio N° 158 emanado del director de obras municipales de Alto Hospicio, de folio 44, los que apreciados conforme lo dispone el artículo 342 N° 3 en relación al artículo 1700 del Código Civil, hacen plena prueba, sumado las declaraciones de ambos testigos de folio 41 que reúnen los requisitos del artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil, por lo que hace plena prueba del hecho de que en el sector que se indica en el libelo se han producido filtraciones y que estas han generado daños al inmueble de autos.

Que de los antecedentes antes reseñados, analizados en conjunto, emanan presunciones que por reunir los caracteres de gravedad, precisión y concordancia, conforme lo dispone el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1712 del Código Civil, permiten tener por establecido Que al menos en los últimos años existen fallas en la red pública de distribución de agua potable



y/o aguas servidas, consistente en fugas de agua producto de la rotura de una matriz aledaña al inmueble de propiedad de la demandante, lo que provoco un asentamiento diferencial del muro perimetral poniente, el que se emplaza en el patio de la vivienda de los demandantes, asentamiento que se origina por filtraciones generadas por las redes sanitarias en la vía Pública, la que se declaró en condición de irreparable lo que constituye un peligro para sus habitantes, de acuerdo al certificado de daños 094/2020, emanado de la dirección de obras municipales de Alto Hospicio y mediante el decreto alcaldicio 2981/2020, de la Municipalidad de Alto Hospicio se dispone la demolición parcial del muro perimetral poniente del inmueble ubicado en el pasaje uno N° 4350 del conjunto habitacional villa Hermosa de la comuna de Alto Hospicio. Que de lo expuesto se extrae que los daños sufridos por los actores son consecuencia directa e inmediata del ilícito que quedo establecido precedentemente y por ende, se tiene por establecido el nexo causal requerido para la procedencia de la responsabilidad extracontractual reclamada.

DECIMO QUINTO: Que, como se viene diciendo, ha quedado acreditado en los motivos que anteceden la concurrencia en el caso de los presupuestos que hacen procedente la responsabilidad civil extracontractual, correspondiendo entonces adentrarnos en el estudio de los perjuicios demandados.

En cuanto a los daños demandados y el monto de las indemnizaciones.

DÉCIMO SEXTO: Que el daño emergente es el empobrecimiento real y efectivo padecido por quien solicita que se le indemnice, y si bien es cierto que en todo caso el daño emergente es indemnizable, también lo es que el que lo reclama debe probarlo. En este sentido, la especie y monto de los perjuicios acarreados por un delito o cuasidelito, sólo resulta de la prueba que se rinda y queda sujeto a la apreciación que de ella se haga por los jueces de fondo, conforme las reglas del título XXXV del libro IV del Código Civil.



Que, en la especie, los actores reclaman la suma de \$ 15.000.000, por concepto de daño emergente, consistente en el daño patrimonial sufrido, constituido por los gastos de reparación de las secciones de la casa habitación comprometidas por el socavamiento que genera el asentamiento diferencial, que atenta contra la estructura del inmueble y los daños generados al cierre perimetral, para lo que hay que realizar trabajos de demolición de muros y radier, refuerzos estructurales, edificación de muros y radier, reparación de portón de acceso al inmueble, los que ascienden a 359 uf, a los que se deben agregar los gastos en los trabajos de reparación de habitaciones que a la fecha del presupuesto no habían sido consideradas, las que cuentan con certificación de daños por parte de la autoridad.

En este sentido el actor acompaña a los autos a folio 1, un presupuesto, el que no se encuentra firmado, documento privado emanado de tercero, que carece de valor probatorio en juicio.

Que la demás prueba rendida en la causa consistente en el certificado de daños, decreto alcaldicio, cartas de reclamo, oficios ordinarios, acta de notario, certificado para fines especiales, de matrimonio, informe de sanciones, inscripción de dominio y testimonial, dan cuenta de otros antecedentes de la causa, pero no se refieren a los gastos incurridos en la demolición y arreglos efectuados en el inmueble sublite, por lo que el actor no logro probar en autos, el daño patrimonial efectivamente causado por el actuar negligente del demandado, por lo que preciso resulta rechazar este acápite en todas sus partes.

DECIMO SEPTIMO: Que en cuanto al daño moral, padecido, los actores demandan la suma de \$ 10.000.000 para cada uno de ellos o lo que SS determine, el que corresponde al sufrimiento, angustia, miedo, frustración y estrés que han tenido que sufrir al ver su hogar deteriorado por los daños producidos, el que es inseguro para vivir, no pudiéndose trasladar a otro lugar para vivir, el que fue declarado irreparable y según lo ordenado por la autoridad municipal debe demolerse, lo que se ve agravado por la indiferencia de la demandada.



La prueba de este supuesto analizado le corresponde al actor conforme al artículo 1698 del Código Civil.

Que, en lo relativo al daño moral, interesa dejar establecido que no es pacífico en la doctrina la elaboración del concepto de daño moral y teniendo presente que la jurisprudencia no ha sido del todo precisa, conviene a éste respecto utilizar el concepto amplio dado por Carmen Domínguez Hidalgo, en su libro, el daño moral cuando expresa que está constituido por el menoscabo de un bien no patrimonial, que irroga una lesión a un interés moral, por uno que se encontraba obligado a respetarlo (Editorial jurídica de Chile Tomo I, noviembre de 2000, página 84).

Que el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, lo que significa que está elevado a la categoría constitucional el derecho de la persona a mantener su integridad psíquica y, por lo tanto, para el ordenamiento jurídico representa un interés que debe ser protegido de manera que cualquiera acción desplegada por persona o agente alguno que provoque o atente contra la integridad, constituya un perjuicio y por ende, un daño que el derecho deba restablecer sea efectiva o alternativamente.

Que, el daño moral entendido como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto a la conculcación en los derechos fundamentales de los demandantes, a los que se les destruye parte de su inmueble, que le sirve de hogar a la familia y que mediante el certificado de daños se declara condición de irreparable y por decreto alcaldicio debe ser demolido, alterando el normal proyecto de vida y familia que tienen los demandantes, que atenta contra el sueño de la casa propia, lo que de modo natural se traduce en la idea de aflicción y temor por el daño producido en la propiedad de uno de los demandantes, provocado por la conducta negligente del demandado, necesaria e indefectiblemente conlleva a una aflicción psíquica, sumado a los malos ratos que ello conlleva, la desvalorización que experimenta la propiedad por los daños



producidos, el riesgo que implica para la integridad física de los demandantes y su familia, al transitar por su hogar, no requiere prueba, porque la infracción al deber de cuidado por parte del demandado está acreditada en autos; por tanto las consecuencias que nacen de su propia naturaleza son obvias y lógicas, y no pueden desconocerse en un procedimiento, aunque se aprecie la prueba en forma legal, pues el mínimo razonamiento, criterio o principio lógico, da por acreditado el daño moral como se explicó.

En síntesis, de acuerdo a los antecedentes allegados al proceso, en especial la prueba documental, testimonial aportada a la causa, por la demandante, constituyen a juicio de este juez indicios serios y precisos que conforman una presunción grave y concordante por lo que es posible presumir la existencia de un daño moral, consecuencia del sufrimiento y angustia que necesariamente debieron experimentar ambos demandantes, al ver parte de su casa con un socavón, que torna a su vivienda insegura, de la que no se han podido cambiar y que tiene una orden de demolición, decretada por la autoridad Edilicia de Alto Hospicio, por ende debe considerarse la gravedad del daño, la modificación de las condiciones de vida de los afectados con el daño producido, a lo que se une la angustia por el futuro de su familia y donde van a vivir, mientras esta no sea reparada, atendido su permanencia e intensidad, dada por la naturaleza del daño y su duración, todo lo que no ha sido desvirtuado por la contraria, por lo que este sentenciador evaluará el daño moral en la suma de **\$ 7.000.000 (siete millones de pesos)** para doña **NANCY GABRIELA ZAMORA CAYO**, la propietaria del inmueble de autos, según la inscripción de dominio, de folio 68 el que ponderado conforme al artículo 342 N° 2, hacen plena prueba de los hechos que consignan y en la suma de **\$ 5.000.000 (cinco millones de pesos)** para don **CLAUDIO ROBERTO VERDUGO MUÑOZ**, cónyuge de la propietaria del inmueble de autos, según certificado de matrimonio, de folio 1, el que ponderado conforme al artículo 342 N° 2, hacen plena prueba de los hechos



que consignan, por lo que se acogerá la demanda en este rubro, por los montos antes dichos, respecto de los demandantes.

DÉCIMO OCTAVO: Que la prueba rendida por la demandada especialmente de la Copia del oficio Ordinario número 73, de 9 de enero de 2014, suscrito por la Superintendente de Servicios Sanitarios; Manual Tuberías y Fittings HDPE, emitido por el fabricante DURATEC – VINILIT S.A; Ejemplar de “Bases Definitivas Estatuto Tarifario Empresa de Servicios Sanitarios Aguas Del Altiplano S.A.”; Manual de uso y Mantenición de la Vivienda, Región de Tarapacá, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, año 2007; Informe número 612.685-A, sobre Lineamientos para determinación de Colapsabilidad de suelos por disolución de sales del IDIEM; Información geológica de la comuna de Alto Hospicio, Geología y suelos salinos, SERNAGEOMIN; Ficha 16 elaborada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios; Manual del cliente, emitido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, dan cuenta de los hechos que se afirman, pero no son aptos para desvirtuar lo concluido.

Que la demás prueba rendida no altera lo razonado por lo que no se hará un análisis pormenorizado de ella.

DÉCIMO NOVENO: Que, no se condenará en costas al demandado, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Es por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1698, 1700, 1712, 2314 y siguientes del Código Civil, 144, 160, 170, 342, 346 y 426 del Código de Procedimiento Civil; **SE DECLARA:**

En cuanto a la alegación que los hechos de la demanda, se refieren a responsabilidad contractual y no extracontractual.

I.- Que **Se rechaza**, la alegación.

En cuanto a la falta de legitimación pasiva.



II.- Que **Se rechaza**, la alegación.

En cuanto a las demás alegaciones y excepciones.

III.- Que **Se rechazan** todas las alegaciones y excepciones de la demandada, según se explicó.

En cuanto al fondo.

IV.- Que, **SE ACOGE** la demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario de mayor cuantía, interpuesta a folio 1 por don **CLAUDIO ROBERTO VERDUGO MUÑOZ** y doña **NANCY GABRIELA ZAMORA CAYO**, en contra de **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, representada indistintamente por don Christian Sayel Barahona Rubio y don Nivaldo Guillermo Gatica Fuentes, todos ya individualizados.

V.- Que, se condena al demandado, al pago de la suma de **\$ 7.000.000 (siete millones pesos)** para doña **NANCY GABRIELA ZAMORA CAYO** y la suma de **\$ 5.000.000 (cinco millones de pesos)** para don **CLAUDIO ROBERTO VERDUGO MUÑOZ**, por concepto de daño moral. Rechazándose la demanda respecto del daño emergente, según se explicó.

VI.- Que el monto indicado precedentemente deberá reajustarse de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor, desde que la sentencia quede ejecutoriada y hasta el pago efectivo, suma que devengará los intereses corrientes previstos para las operaciones reajustables, los que se calcularán a contar que esta sentencia se encuentre ejecutoriada y para el caso de mora.

VII.- Que, no se condena en costas al demandado, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2077-2021



Dictada por don **HÉCTOR ANDRÉS KOMPATZKI DELARZE**, Juez Titular
de este Primer Juzgado de Letras de Iquique.

En Iquique, quince de septiembre de dos mil veintidós, hice constar por
estado diario la sentencia que antecede, en cumplimiento a lo ordenado por el
artículo 162 del Código de Procedimiento Civil.



